

TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS
DISTRITO SUR DE NUEVA YORK

-----x
CHEVRON CORPORATION,

Demandante,
- contra -

11 Civ. 0691 (LAK)

STEVEN DONZIGER y otros,

Demandados.
-----x

MEMORANDO DE OPINIÓN
(CORREGIDO)

Comparecencias:

Randy M. Mastro
Andrea E. Neuman
Kristen L. Hendricks
Scott A. Edelman
William E. Thompson
GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP
Abogados del Demandante

John W. Kecker
Elliot R. Peters
Christopher J. Young
Jan Nielsen Little
Matthew M. Werdeger
Nikki H. Vo
Paula L. Blizzard
William S. Hicks
KEKER & VAN NEST, LLP
*Abogados de los Demandados de
Donziger*

Julio C. Gomez
JULIO C. GOMEZ, ATTORNEY AT LAW LLC

Tyler G. Doyle
Craig Smyser
Larry R. Veselka
Christina A. Bryan
Garlard D. Murphy, IV
SMYSER KAPLAN & VESELKA, L.L.P.

*Abogados de los Demandados Hugo Gerardo,
Camacho Naranjo y Javier Piaguaje Payaguaje*

Benjamin H. Green
Michael Erik Sims
Stuart Alan Krause
ZEICHNER ELLMAN & KRAUSE LLP

Gordon Mehler
LAW OFFICES OF GORDON MEHLER, P.L.L.C.

Jessica R. Torbin
Joe L. Silver
Martin Beier
SILVER & DEBOSKEY, A PROFESSIONAL
CORPORATION

Abogados de Stratus Consulting, Inc.

LEWIS A. KAPLAN, *Juez de Distrito*.

El Demandante Chevron Corporation (“Chevron”) solicitó una orden de protección que prohibiera a los demandados divulgar dos declaraciones testimoniales que se habían presentado bajo sello, de revelar o identificar información relativa a los testigos, con excepción de los procuradores judiciales que han comparecido en esta acción. El conflicto que dio lugar al escrito se relacionó principalmente con la protección disponible conforme a una orden de protección anterior, si se podía ampliar para incluir, entre otras restricciones, la prohibición de divulgar las identidades y las manifestaciones de los testigos a los abogados ecuatorianos del litigio de Lago Agrio, entre otras.

El 14 de febrero del 2013, el Tribunal concedió la solicitud de Chevron en la mayoría de sus partes y dictó una orden de protección que prohibía a los demandados divulgar alguna de las declaraciones de Fulano o cualquier información de identificación de Fulano 1 o Fulano 2 que se hubiera extraído de otras declaraciones, a cualquiera que no fuera procurador judicial en esta acción a menos que hubiera autorización anterior con notificación al demandantes y con las condiciones que impusiera el Tribunal (la “orden del 14 de febrero”).¹ Esta sentencia explica las razones que justifican la acción de tribunal, amplía sus conclusiones y establece un marco para formatear más la orden, en caso de que resultara apropiado, para asegurar que la restricción al acceso público no sea mayor que la necesaria.

Antecedentes

Para entender el contexto de este pedido, es necesario tener algunos datos sobre los

¹ DI 802. The order is being modified in one respect by a separate filing today.

complejos antecedentes de este caso.

La Sentencia Ecuatoriana y este Litigio

Un tribunal ecuatoriano dictó una sentencia de USD18.200 millones (la “Sentencia”) contra Chevron Corporation (“Chevron”)² en una acción iniciada por 47 individuos conocidos como los Demandantes de Lago Agrio (los “DLA”), dos de los cuales, Hugo Gerardo Camacho Naranjo y Javier Piaguaje Payaguaje (los “Representantes de los DLA”), habían comparecido en esta acción.³

Chevron inició esta acción contra los DLA, su abogado estadounidense principal, Steven Donziger y su bufete de abogados y otros involucrados en el litigio de Lago Agrio.⁴ Alega en parte que la Sentencia es el producto de un fraude y de violaciones a la Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (“RICO”). La RICO y, en alguna medida, los reclamos de fraude se basan en las alegaciones de que Donziger, abogado de Nueva York, y otros con sede en Estados Unidos, concibieron, ejecutaron en gran parte, financiaron significativamente y dirigieron sustancialmente un plan para extorsionar⁵ y defraudar a Chevron por,

² DI 168 (Sentencia de Lago Agrio).

³ Los restantes DLA están en rebeldía y no se defienden en esta acción. Decl. de Hendricks [DI 206] ¶ 15 y An. 16 (certificado de Clerk).

⁴ Chevron manifiesta también que hubo varios “co-conspiradores” que formaron parte del proyecto violatorio de la ley RICO, pero no son nombrados como demandados.

⁵ Demanda modificada (“Demanda”) ¶ 1 (se alega que los demandados han “buscado extorsionar, defraudar y de otras maneras perjudicar ilícitamente a la demandante Chevron por medio de un plan que concibieron y sustancialmente ejecutaron en los Estados Unidos”); *Ibid.* ¶ 2 (“El objetivo final de la empresa es crear suficiente presión sobre Chevron en los Estados Unidos para extorsionar a la compañía a que pague para detener la campaña en su contra”).

entre otras cosas, (1) iniciar el caso de Lago Agrio;⁶ (2) fabricar (principalmente en los Estados Unidos) pruebas para su utilización en ese juicio y corromper e intimidar al poder judicial ecuatoriano para obtener una sentencia viciada;⁷ (3) ejercer presión sobre Chevron para obligarla a pagar dinero no solo mediante el litigio y la sentencia de Lago Agrio, sino también sujetando a Chevron a ataques públicos en los Estados Unidos y en cualquier otro lugar sobre la base de declaraciones falsas y engañosas;⁸ (4) inducir a las autoridades públicas estadounidense a investigar a Chevron;⁹ y (5) realizar declaraciones falsas a los tribunales estadounidenses e intimidar e influir testigos en procesos judiciales estadounidenses para cubrir sus actividades ilícitas.¹⁰ Los DLA supuestamente están llevando adelante procesos para ejecutar la Sentencia al menos en Canadá, Brasil y la Argentina, lo que es coherente con una aparente estrategia “de llevar adelante una agresiva estrategia de ejecución a escala mundial con el fin de procurar el apalancamiento necesario para obtener de Chevron un acuerdo conciliatorio”.¹¹

⁶ *Ibíd.* ¶ 3.

⁷ *Por ejemplo, Ibíd.* ¶ 145 (“En los Estados Unidos, ya se había puesto en marcha el proceso para redactar el Informe Cabrera [informe de un perito designado por el tribunal, supuestamente independiente]”); *Ibíd.* ¶ 151 (“Si bien Stratus [consultor ambiental de los DLA] fue el coordinador principal del [...] Informe de Cabrera, otros integrantes del equipo de peritos [de los DLA] radicados en EE. UU. [...] también contribuyeron al informe... aunque no se mencionaron sus aportes en el informe ni se divulgaron a Chevron”); *Ibíd.* ¶¶ 353-56; Decl. de Mastro [DI 746] An. C (en adelante, “Decl. de Guerra”).

⁸ Demanda ¶ 214.

⁹ *Ibíd.* (“Además, llevaron esta campaña de presión a los organismos estatales y federales de los EE. UU., en busca de su ayuda falsamente inducida en este plan extorsionista.”); *Ibíd.* ¶ 216.

¹⁰ *Ibíd.* ¶¶ 273-77, 291-300, 311-16.

¹¹ *Chevron Corp. v. Donziger*, 768 F. Supp.2d 581, 622-24 (S.D.N.Y. 2011), *rev'd on other grounds sub nom. Chevron Corp. v. Naranjo*, 667 F.3d 232 (2d Cir. 2012), *cert. negado*, 133 S.Ct. 423 (2012).

Las Nuevas Pruebas - El Supuesto Soborno de los DLA al Juez Ecuatoriano

El desarrollo más reciente de esta saga sentó las bases para el escrito de Chevron. El 28 de enero del 2013, Chevron presentó una declaración de Alberto Guerra Bastidas, exjuez de la Corte Provincial de Sucumbíos, Ecuador,¹² el Tribunal que dictó la Sentencia y en un momento el juez designado para el caso contra Chevron. En resumen, Guerra manifiesta que los abogados de los DLA — Pablo Fajardo y Donziger— sobornaron al juez que firmó la sentencia ecuatoriana para obtener el resultado deseado y, de hecho, le dieron la sentencia, que los DLA habían redactado en todos los aspectos importantes.

Yendo a los detalles, la declaración de Guerra, que está corroborada en algunas partes por otras declaraciones presentadas públicamente,¹³ manifiesta que cuando el Juez Nicholas Zambrano¹⁴ fue designado en el caso de Chevron, le pidió a Guerra “ponerme en contacto con los abogados de la empresa Chevron para negociar un acuerdo en el que la compañía nos pagaría al Sr. Zambrano y [Guerra] por emitir la sentencia

¹² El Sr. Guerra fue dado de baja como juez en el 2008, aparentemente por declaraciones privadas respecto de que el caso contra Chevron debía desecharse. Sin embargo, asegura que la razón real de su expulsión fue que confrontó con dos jueces que luego se desempeñaron en el caso Chevron “con respecto a varias decisiones dudosas e ilegales que ellos habían tomado al interior del proceso, y sobre su práctica de pedir a los peritos dirimientes el 25 por ciento de sus honorarios como contraprestación por su nombramiento como tales”. Decl. de Guerra ¶ 6.

¹³ Decl. Mastro [DI 746] An. E (en adelante, “Decl. de Callejas ”); *Ibíd.* An. F (en adelante, “Decl. de Racines”); *Ibíd.* An. G (en adelante, “Decl. de Campuzano”), *Ibíd.* An. H (en adelante, “Decl. de Carvajal”).

¹⁴ El Juez Zambrano supuestamente fue removido de su puesto después de haber dictado la sentencia contra Chevron “por liberar a un presunto narcotraficante en un acto de ‘evidente negligencia o error inexcusable’”. Eduardo García y Alexandria Valencia, *Chevron espera beneficiarse de la destitución del juez ecuatoriano*, REUTERS (12 de marzo del 2012) (disponible en <http://www.reuters.com/article/2012/03/09/ecuador-chevron-idUSL2E8E9ETI20120309>) (visitado por última vez el 17 de febrero del 2013).

definitiva a favor de Chevron”.¹⁵ Guerra obligó, pero Chevron rechazó la tentativa de acercamiento. Por lo tanto, el Juez Zambrano, quien le había dicho a Guerra que ya había logrado un acuerdo con los representantes de los DLA “para mover el proceso de manera rápida a favor de ellos”, sugirió que Guerra se reuniera con el abogado ecuatoriano de los DLA, Fajardo.¹⁶ Guerra luego se reunió con Fajardo. Hablaron sobre el hecho de que Guerra ya tenía un acuerdo con Zambrano conforme al cual Guerra escribió las sentencias de Zambrano en casos civiles. Guerra y Fajardo luego acordaron que (1) Guerra haría que el caso de Chevron se moviera rápido, (2) “se le limitaría el espacio procesal a la Chevron no concediéndole sus peticiones respecto a los errores esenciales alegados en los autos que [Guerra] escribi[ría]”, y (3) los “representantes [de los DLA] pagarían [a Guerra] aproximadamente 1.000 dólares mensuales por escribir las providencias que le correspondían hacer al Sr. Zambrano”.¹⁷

Se dice que este acuerdo continuó hasta que el Juez Zambrano fue reemplazado en el caso de Chevron por el Juez Ordóñez.¹⁸ Sin embargo, con el tiempo, se presentó un pedido de recusar al Juez Ordóñez en el caso de Chevron ante el Juez Zambrano, que supuestamente “vio [...] como una oportunidad para retomar el control del caso Chevron, y [le] pidió [a Guerra] que le ayudara a redactar la providencia por la que se aceptaba la recusación del caso del Juez Ordóñez”.¹⁹ Supuestamente el Juez Zambrano “vio en esto como

¹⁵ Decl. de Guerra ¶ 12.

¹⁶ *Ibíd.* ¶ 13.

¹⁷ *Ibíd.*

¹⁸ *Ibíd.* ¶ 20.

¹⁹ *Ibíd.* ¶ 21.

una oportunidad para acercarse nuevamente a los abogados de Chevron para ver si estaban dispuestos a pagar para decidir el caso en su favor”.²⁰ Envió a Guerra para explorar esa posibilidad, pero Chevron volvió a rechazar el intento de acercamiento.²¹

En ese punto, el Juez Zambrano, según Guerra, “sugirió y autorizó [a Guerra] el buscar un acuerdo con los representantes de los demandantes con el fin de que estos obtengan un veredicto a su favor, a cambio de un reconocimiento a favor del Sr. Zambrano por la suma de al menos \$500.000 dólares; y en [] beneficio [a el mismo], de la suma que [Guerra] pueda concertar o acordar”. La oferta propuesta incluía que los demandantes redactarían el borrador de la sentencia y el Juez Zambrano la firmaría y la publicaría como de su autoría”.²² Guerra llevó la oferta a Fajardo, quien expresó interés y dijo que lo hablaría con Donziger. Luego, Guerra recibió un llamado de Fajardo, quien le pidió una reunión con él, Donziger y Luis Yanza.²³ En esa reunión, Guerra resumió la propuesta. Donziger le contestó que ellos, los DLA, no tenían esa suma de dinero. Sin embargo, después, Zambrano dijo a Guerra que había estado en contacto directo con Fajardo y que “los abogados de los representantes habían accedido a pagarle \$500.000 dólares de lo que ellos recolectaron en el futuro con la sentencia, a cambio de permitirles escribir

²⁰ *Ibíd.* ¶ 22.

El Juez Zambrano fue designado para reemplazar al Juez Ordóñez en el caso de Chevron en el otoño del 2010. Decl. de Carvajal ¶ 3.

²¹ Decl. de Guerra ¶ 22.

²² *Ibíd.* ¶ 23.

²³ Yanza es el cofundador del Frente de Defensa de la Amazonía (“FDA”), organización sin fines de lucro que intenta representar a los DLA, y gerente general de Selva Viva, empresa ecuatoriana que administra los fondos del litigio de Lago Agrio.

la sentencia a favor de los demandantes”.²⁴ Zambrano dijo a Guerra que distribuiría el dinero con Guerra.²⁵

Guerra luego resumió su papel como escritor fantasma del Juez Zambrano. Sin embargo, en relación con la sentencia final, Guerra relata que su papel cambió un poco. Casi dos semanas antes de que se dictara la sentencia, “Zambrano entregó [a Guerra] un borrador de sentencia [que había sido redactado por los abogados de los demandantes y entregado a Zambrano], para que [Guerra] l[o] revisara”. Zambrano le pidió a Guerra “trabajar en el documento para afinarlo y pulirlo dándole más estructura jurídica”.²⁶ Lo hizo en el domicilio de Zambrano y utilizando la computadora de Fajardo.²⁷ Hizo algunos cambios, haciendo que “resultara similar a una sentencia proveniente de la Corte de Sucumbíos [es decir, de Lago Agrio]”.²⁸

Cuando Guerra terminó, le devolvió el documento a Zambrano, que “no era muy diferente que el que los demandantes le habían dado”. Zambrano le dijo que los abogados de los DLA habían hecho cambios en la sentencia hasta el “último minuto antes de ser publicada”.²⁹

Como se mencionó, la cuenta de Guerra está corroborada en una cantidad de aspectos por otras

²⁴ Decl. de Guerra ¶ 23.

²⁵ *Ibíd.*

²⁶ *Ibíd.* ¶ 25.

²⁷ *Ibíd.*

²⁸ *Ibíd.* ¶ 26-27.

²⁹ *Ibíd.* ¶ 28.

declaraciones que se presentaron públicamente hace poco.³⁰

Sentencias Anteriores de Este Tribunal Con Respecto a las Alegaciones de Fraude

Incluso antes de que se presentara la declaración de Guerra, Chevron había presentado pruebas sustanciales de fraude para la obtención de la Sentencia. En cuanto a esto, el Tribunal incorpora como referencia su sentencia de julio del 2012 sobre el pedido de Chevron de sentencia sumaria parcial.³¹ Algunos destacados pertinentes son que el Tribunal luego concluyó, en un expediente menos completo que antes, que no había hechos genuinos al menos respecto de lo siguiente:

- Donziger y Fajardo, el principal abogado ecuatoriano de los DLA, presionó a un juez ecuatoriano para (1) finalizar las inspecciones judiciales que se habían ordenado previamente, (2) sustituir una única inspección global para determinar el alcance del supuesto daño ambiental, y (3) seleccionar un “perito global” elegido por los DLA, Richard Cabrera, para realizarlas. Obraron de ese modo amenazando al juez con la presentación de una demanda de inconducta si no cumplía con sus deseos.
- El informe que Cabrera finalmente presentó:

“no fue entera ni predominantemente suyo ni de los asistentes o consultores que trabajan para él. No existe controversia genuina respecto de los hechos de que el equipo de los DLA preparó en secreto su plan de trabajo, trabajó codo a codo

³⁰ Véase generalmente Callejas Decl.; Racines Decl.; Campuzano Decl.; Carvajal Decl.

³¹ Véase *Chevron Corp. v. Donziger*, — F.Supp.2d —, 2012 WL 3538749 (S.D.N.Y. 31 de julio del 2012).

con él para llevarlo adelante y redactó la mayor parte del informe y sus anexos. Tampoco existe una controversia genuina respecto del hecho de que el equipo de los DLA luego objetó objetado públicamente al mismo informe que ellos, en una gran parte, había redactado en secreto por ser ‘injustamente favorable a [Chevron]’ y ‘demasiado conservador’ en su análisis de daños. Las preguntas presentadas por Cabrera en respuesta a las objeciones de los DLA (y de Chevron) —como el informe en sí— fueron redactadas al menos en una parte sustancial por el equipo de DLA y escritas para ser leídas como si las hubiera escrito Cabrera. Estas pruebas no controvertidas demuestran que el informe y las subsiguientes respuestas presentadas a nombre de Cabrera fueron manchadas de fraude”.³²

- Partes de la Sentencia, que supuestamente había sido redactada por el Juez Zambrano, en realidad eran sustancialmente idénticas a un memorando interno confeccionado por los DLA que no era parte del expediente judicial ecuatoriano.³³ Por lo tanto, al menos parte de la sentencia fue escrita por los DLA y fue adoptada sin cambios por el juez, todo en secreto. Claro que esta conclusión precedió a la declaración de Guerra, que, de ser verdad, aclara que los DLA sobornaron a Zambrano y a Guerra para que adoptara una sentencia redactada por los DLA.
- La Sentencia, a pesar de que supuestamente no tuvo en cuenta el informe de Cabrera, de hecho, se basó en él por lo menos hasta cierto punto.³⁴

Descubrimientos de Fraude de Otros Tribunales

Tampoco este Tribunal fue el único en concluir que existen pruebas sustanciales de fraude. Chevron, los DLA y otros han estado litigando Artículo 1782 y otros procedimientos de

³² *Chevron Corp.*, 2012 WL 3538749, en *33 (nota omitida).

³³ *Ibíd.* en *31.

³⁴ *Ibíd.* en *33.

descubrimiento ante otros tribunales de distrito de todo el país durante más de un año. Las personas que se negaban a ofrecer pruebas a Chevron en este proceso, incluidos los DLA, típicamente han alegado protección de producto del trabajo y de secreto profesional. Chevron se ha opuesto a toda protección de producto del trabajo y de privilegio profesional, sobre la base de que se había dado la excepción de delito-fraude.

En este escrito, al menos otros seis tribunales de distrito federales han concluido —todos antes de la presentación de la declaración de Guerra y los materiales relacionados— que Chevron estableció un caso de fraude *prima facie* con respecto a la obtención de la Sentencia.³⁵

Los Temas del Pedido de Orden de Protección

Guerra sin dudas es un importante testigo del caso. Alega que estuvo dentro de una conspiración corrupta para arreglar el caso contra Chevron y ahora dice que ha revelado trabajos internos de la conspiración.

En todo caso con un testigo de este tipo, uno espera un ataque a la credibilidad. Y como en cualquier otro caso, la corroboración de su historia puede ser muy importante.

Entre las pruebas que presentó Chevron están las declaraciones de dos testigos, Fulano 1 y Fulano 2, que se han presentado bajo sello y se pusieron solo a disposición del Tribunal y de los procuradores judiciales de esta acción. Ambos testigos residen en Ecuador. Ambos temen represalias contra sus familias y

³⁵ Véase *Chevron Corp. v. Champ*, No. 10-mc-27, 2010 WL 3418394, en *6 (W.D.N.C. 30 de agosto del 2010); *In re Applic. of Chevron Corp.*, No. 10-cv-1146-IEG, 2010 WL 3584520, at *6 (S.D. Cal. 10 de septiembre del 2010); *In re Applic. of Chevron Corp.*, 633 F.3d 153, 166 (3d Cir. 2011); Transcript of Hearing en 43:13-44:16, *In re Applic. of Chevron Corp.*, No. cv-10-2675 (D.N.J. 11 de junio del 2010), DI 33; *Chevron Corp. v. Salazar*, 275 F.R.D. 437, 442 (S.D.N.Y. 2011); Transcripción de audiencia en 56:23-58:10, *Chevron Corp. v. Page*, No. RWT-11-1942 (D. Md. 25 de enero del 2013).

ellos. Una de las declaraciones contiene información que, en caso de resultar acreditada, corroboraría a Guerra. La otra ofrece una corroboración más modesta pero contiene información importante sobre el riesgo de represalias contra estos y otros testigos.

Discusión

Los demandados alegan que la Regla de Procedimiento Civil Federal 26(c) autoriza la medida solicitada aquí con la demostración de “justa causa”. En todo caso, “es fundamental que ‘[t]odos los tribunales tengan facultades de supervisión sobre sus propios expedientes y archivos’”,³⁶ que pueda sellarlos y evitar su divulgación en circunstancias apropiadas,³⁷ y que toda acción de este tipo sea informada por presunciones de acceso público a los registros judiciales conforme al derecho común y la Primera Enmienda. El Tribunal comienza a partir de estas premisas.

³⁶ *Gambale v. Deutsche Bank AG*, 377 F.3d 133, 140-41 (2d Cir. 2004) (cita de *Nixon v. Warners Comm’ns, Inc.*, 435 U.S. 589, 598 (1978)).

³⁷ Por ejemplo, *Bridge C.A.T. Scan Assoc’s v. Technicare Corp.*, 710 F.2d 940, 945 (2d Cir. 1983); *Int’l Prods. Corp. v. Koons*, 325 F.2d 403, 407-08 (2d Cir. 1963) (“Ya sea que la Norma en sí autorice o no la providencia en tanto también restringe todas las declaraciones juradas presentadas por los demandados sobre varios escritos, no tenemos duda acerca de la jurisdicción de la corte para hacerlo en virtud de las inherentes ‘facultades equitativas de los tribunales sobre sus propios procesos, para evitar abusos, opresiones e injusticias’, *Gumbel v. Pitkin*, 124 U.S. 131, 144, 8 S.Ct. 379, 31 L.Ed. 374 (1888); *Parker v. Columbia Broadcasting System*,[,], 320 F.2d [937,] 938 [(2d Cir. 1963)]”).

Buena Causa

Como asunto inicial, y poniendo a un lado las presunciones de acceso público, los tribunales de distrito pueden dictar órdenes de protección y de sellado para proteger a una parte o persona de “molestias, vergüenza, opresión o carga o gastos indebidos”,³⁸ para no mencionar preocupaciones aún más graves. En este caso, la divulgación de identidades de los Fulanos a los DLA y, especialmente sus abogados y aliados ecuatorianos, particularmente en esta coyuntura, implicaría graves riesgos.

Los Abogados y los Aliados Ecuatorianos de los DLA

Varias consideraciones asumen el riesgo de divulgación a los DLA y sus abogados y aliados ecuatorianos.

Rechazo de Reconocer o Cumplir con Órdenes del Tribunal

En primer lugar, a pesar de que Fajardo, Yanza y todos los DLA son demandados en la presente acción, fueron debidamente notificados, todos —con la excepción de dos representantes de los DLA— han estado en rebeldía, por lo tanto han renunciado a cualquier excepción jurisdiccional. Fajardo, Yanza, el FDA y cuarenta y cinco de los DLA no reconocen la jurisdicción de este Tribunal ni los efectos vinculantes de sus órdenes.³⁹ Fajardo y otros, en repetidas oportunidades,

³⁸ La carga de establecer una buena causa es de la parte que solicita la medida. *Gambale v. Deutsche Bank AG*, 377 F.3d 133, 142 (2d Cir. 2004).

³⁹ Véase, por ejemplo, Decl. de Champion [DI 770] An. 2, en 2 (Fajardo “[m]anifestó que el juez Kaplan no tiene jurisdicción sobre los abogados y demandantes no estadounidenses, y, por lo tanto, no se sentía obligado a cumplir con su orden” que concedía una medida precautoria).

se han negado a cooperar en el descubrimiento de pruebas.⁴⁰ No hay razón para creer que cumplirían con otras restricciones que se impusieran sobre su uso de la información sobre los Fulanos u otras acciones si la información se divulgaba de manera general al público o a estos individuos en particular.

Amenazas a Otros Testigos

En segundo lugar, Yanza y Fajardo ya habían amenazado a otros dos testigos de Chevron —Guerra y Reyes⁴¹— con demandas por difamación y denuncias penales sobre la base de su presentación de pruebas en este Tribunal.⁴² Como se determinó antes, no hay problema genuino de hechos materiales que

⁴⁰ Por ejemplo, a pesar de la sentencia del Tribunal en la acción del Cargo 9 (11 Civ. 3718) de que los abogados de los DLA era representantes de sus clientes y de que los Representantes de los DLA por lo tanto, estaban obligados a presentar todos los documentos que tuvieran en custodia o control, Fajardo, Yanza y otros insistieron en su negación a presentar un solo documento en respuesta, alegando que el derecho ecuatoriano se los prohíbe. Véase DI 562, 563. Más recientemente, cuando Chevron se dio cuenta de la declaración de Pablo Sáenz —uno de los abogados ecuatorianos de los DLA— abogados de los DLA informaron a Chevron que Sáenz se negaba a estar disponible para la declaración. Véase Decl. de Champion [An. 770] An. 4; véase también DI 778.

⁴¹ Ramiro Fernando Reyes Cisneros (“Reyes”) es un ingeniero ambiental y de petróleo ecuatoriano que alega haber sido abordado por Donziger y Fajardo para desempeñarse como el perito global “independiente” designado por el tribunal. Después de que el equipo se quedara con Cabrera, Reyes alega haber estado presente en una reunión con Fajardo, Yanza y Donziger durante la cual “dejaron a un lado la apariencia de que el Sr. Cabrera actuaría de forma independiente para escribir un informe pericial bien fundamentado técnicamente y ejecutado de acuerdo a los estándares profesionales”. Decl. de Mastro [DI 658] An. 3014 (Decl. de Reyes).

⁴² Decl. de Neuman [DI. 796] An. 11, en 6 (Yanza: “vamos a iniciar [] acciones legales contra el señor, eh, ex juez, ehm, de la Corte [Guerra] y el Sr. Reyes ... porque lo que están diciendo y haciendo es realmente, eh, una calumnia o — o delitos graves que afectan a los dirigentes, al proceso, y al mismo Estado ecuatoriano”) (énfasis añadido); An. 12 (Fajardo: “Haremos una demanda penal [contra Guerra] aquí en Ecuador para que [él] venga y responda por un delito grave”).

indiquen que Fajardo participó en la presión de un juez ecuatoriano para finalizar las inspecciones judiciales y designar a Cabrera como perito global mediante amenazas al juez de presentar una queja disciplinaria. Además, como demuestra lo anterior, hay pruebas sustanciales de que al menos Fajardo y Yanza sobornaron al juez de primera instancia para obtener una sentencia favorable a los DLA. Según Guerra, tanto Fajardo como Yanza participaron personalmente en la reunión en que la propuesta de sobornos se hizo a los demandantes por Guerra y fue Fajardo quien luego habría comunicado la contraoferta de los representantes de los DLA para el negocio corrupto que supuestamente aceptó Zambrano. Ahora que la declaración de Guerra está en el expediente público, Fajardo, Yanza y sus asociados tienen muchos intereses personales y económicos para intentar protegerse a sí mismos y a la Sentencia al atacar a Guerra y a cualquiera cuyo testimonio pueda corroborar a Guerra. Y Fajardo ha dejado en claro que el equipo de los DLA LAP controla de cerca a la “gente vinculada con Chevron” como Guerra y Reyes, para que “cono[zucan] qué están haciendo y adónde están viajando frecuentemente”.⁴³ Fajardo admitió, por ejemplo, que habían descubierto nuestras actividades anteriores de Guerra al “pedi[r] la información — los movimientos migratorios del Sr. Guerra [...] adonde va y adonde puede” encontrarse.⁴⁴

Mientras la pregunta de si la cuenta de Guerra es precisa se decidirá otro día , las amenazas de Yanza y Fajardo contra Reyes y Guerra así como el papel no disputado de Fajardo en presionar al juez con respecto a las inspecciones judiciales y la designación de Cabrera, la persistente obstrucción de las pruebas del caso y casi todas las pruebas del expediente muestran un riesgo sustancial

⁴³ Decl. de Champios [DI 759] An. 3, en 4.

⁴⁴ *Ibíd.* en 4-5.

de que Fajardo, Yanza y sus asociados intenten presionar, intimidar y tomar represalias contra los Fulanos si se enteraran de sus identidades.

Intimidación de los Tribunales Ecuatorianos

En tercer lugar, la estrategia de los DLA en Ecuador, al menos hasta que sobornaron al juez Zambrano si es que eso ocurrió, fue intimidar al poder judicial para obtener el resultado que querían.

Ya hemos visto que los DLA, a través de Fajardo, hicieron presión para que el juez de Lago Agrio asegurara la adopción de su propuesta de un análisis global y la selección de Cabrera como el perito designado por el tribunal. Pero no terminaron allí.

Donziger se desempeña como el general de campo en lo que describe en las escenas eliminadas de *Crude*⁴⁵ como una “batalla política [...] se está librando a través de un caso judicial”,⁴⁶ visión que encaja con su evaluación del sistema judicial ecuatoriano como corrupto e impulsado por la política. Donziger, Fajardo, Yanza y el FDA han realizado esfuerzos con determinación para intimidar a la judicatura ecuatoriana. Según Donziger, ha sido importante movilizar al país políticamente “de manera tal que ningún juez pueda fallar en contra nuestro y sentir como que puede salirse con la suya en términos de su carrera”.⁴⁷ Donziger solicitó a un miembro del equipo jurídico de los DLA que “confeccionara un plan detallado con todos los pasos para atacar al juez

⁴⁵ Hay un debate sobre el documental *Crude* y las escenas en *In re Chevron Corp.*, 749 F. Supp. 2d 141, 146 (D.S.N.Y. 2010) *aff’d sub nom. Lago Agrio Plaintiffs v. Chevron Corp.*, 409 F. App’x 393 (2d Cir. 2010).

⁴⁶ Decl. de Hendricks, [DI 41, No. 10-MC-00002 (LAK)] (en adelante, “Decl. de Hendricks I”) An. A, CRS-060-00-04.

⁴⁷ *Ibid.*, CRS-032-00-01.

a través de canales jurídicos e institucionales, y a través de cualquier otro canal que [a él] se le ocurriera”.⁴⁸ Un ejemplo, incluido en una parte de *Crude*, muestra a Donziger y a otros representantes de los DLA viajando a una reunión *ex parte* con el juez el 30 de marzo del 2006. Antes de la reunión, Donziger describió su plan de “intimida[r]”, “presi[o]n[ar]” y “humilla[r]” al juez:

“[E]l único idioma que yo creo que este juez va a comprender es el de la presión, intimidación y humillación. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Vamos a ponerlo en su lugar. [...] Yo nunca hago esto como abogado. En los Estados Unidos no tienes que hacer estas cosas. Es-- es sucio. Lo odio. Lo odio, pero es necesario. No voy a dejar que se salgan con la suya”.⁴⁹

También explicó lo siguiente ante la cámara del cineasta:

“[E]l sistema judicial [de Ecuador] es absolutamente débil. Como, la única manera en que se puede conseguir un juicio justo es si usted hace cosas como esa, como ir y enfrentar al juez con los medios de comunicación presentes. Y pelear y gritar y dar alaridos y hacer un escándalo. Y, sabe, eso nunca pasaría en los Estados Unidos. Eso nunca pasaría en un sistema judicial que tuviese integridad”.⁵⁰

“¡Todos son [es decir, los jueces ecuatorianos] corruptos! Es— es su derecho de nacimiento ser corruptos”.⁵¹ “Se puede resolver cualquier cosa siempre y cuando los jueces tengan la suficiente inteligencia como para entender la política. [...] [N]o es que tengan que tener suficiente inteligencia como para entender la ley, mientras entiendan la política”.⁵²

“[E]s un problema con la debilidad institucional en la judicatura, en general, y de esta corte,

⁴⁸ Decl. de Hendricks, [DI 6, No. 11 Civ. 0691 (LAK)] (en adelante, “Decl. de Hendricks II”) An. 96.

⁴⁹ Decl. I de Hendricks, Anexo A, CRS-052-00-06. Esta no es la primera vez que Donziger mostró tal estrategia. Cuando un juez ecuatoriano no permitía a Donziger comparecer en la corte porque no tenía pasaporte, Donziger ordenó al abogado ecuatoriano que mintiera y dijera que el juez había llamado “gringo” a Donziger. *Ibid.*, CRS-046-02- 01.

⁵⁰ *Ibid.*, CRS-053-02-01.

⁵¹ *Ibid.*, CRS-053-02-03.

⁵² Decl. II de Hendricks, Anexo 1, CRS-129-00-02.

en particular. [...] Creemos que toman decisiones de acuerdo a quién temen más, no de acuerdo a lo que establecen las leyes”.⁵³

Además, entre los hechos filmados por el equipo se encontraba una conversación entre Donziger y Fajardo en la que ambos discutían la necesidad de “cada vez siendo más agresivos” y de “organi[zar] marchas de presión en la corte”. En la misma escena, Donziger se refirió al litigio como una “cuestión de combate” que requiere “realmente armar un ejército”.⁵⁴

Las tomas eliminadas de *Crude* mostraron una reunión del 6 de junio del 2007 en la que Donziger delineó una estrategia para presionar a la corte ecuatoriana. Donziger dijo a los presentes que los DLA necesitaban “hacer más, políticamente, para controlar a la corte, para presionar a la corte”, dado que las cortes ecuatorianas “toman decisiones de acuerdo a quién temen más, no de acuerdo a lo que establecen las leyes”.⁵⁵ Donziger expresó su preocupación acerca de que nadie temiera a los demandantes, y sostuvo que los demandantes no ganarían a menos que las cortes comenzaran a temerles.⁵⁶ Manifestó también su deseo de tomar la corte con una propuesta masiva como modo de enviar un mensaje a la corte de “no se metan con nosotros –ni ahora, ni– ni depues, ni nunca”.⁵⁷ Luego propuso levantar “nuestro propio ejército”, a lo que Yanza agregó “un

⁵³ Decl. I de Hendricks, Anexo A, CRS-350-04-01.

⁵⁴ *Ibíd.*, CRS-346-00-02.

⁵⁵ *Ibíd.*, CRS-350-04-01.

⁵⁶ *Ibíd.*

⁵⁷ *Ibíd.*

grupo especializado [...] de acción inmediata”.⁵⁸ La conversación acerca de levantar un ejército para presionar a la corte luego continuó, con Yanza moviendo la cámara en tanto le decía a Donziger que el “ejército” podría contar con armas.⁵⁹

Dos días después, hablando directamente a la cámara, Donziger siguió enfatizando la importancia de presionar al juez del litigio de Lago Agrio. Según Donziger, el “problema más grande” de los demandantes ha sido su incapacidad de presionar al juez. Explicó que demandar a Chevron por daño moral o presionar al Fiscal General para que iniciara un proceso de instrucción no era suficiente para hacer que el juez se sintiera presionado.⁶⁰ Donziger afirmó que los demandantes necesitaban hacer cosas que el juez “en verdad va a sentir”, tales como ser “exij[ido]” por le presidente del país o por la corte suprema, dando a entender que Donziger y otros podían desarrollar estrategias que resultaran en tales acciones. Más tarde ese mismo mes, Donziger le pidió a Berlinger y a su gente que filmara el “‘ejército’ privado” de los DLA, que él definió como “muy eficaz” porque “siguieron a un abogado de Texaco en el despacho de un juez y tuvieron un enfrentamiento”, “una parte crucial de [la] estrategia [...] permitiendo el avance del caso ...”.⁶¹

Finalmente, Donziger participó en una conversación en una cena acerca de lo que podría ocurrir a un juez que decidiera en contra de los DLA. Uno o más de los partícipes de la conversación sugirieron que

⁵⁸ *Ibíd.*, CRS-350-04-02.

⁵⁹ *Ibíd.*

⁶⁰ *Ibíd.*, CRS-376-04-01.

⁶¹ Decl. II de Hendricks, Anexo 99, en 1.

al juez lo “matarían” por tal decisión. Donziger respondió que el juez “[q]uizás no [lo matarían], pero él cree—el cree que sí ... [l]o cual es igual de bueno”.⁶² El comentario revela al menos el deseo de Donziger de beneficiarse a partir del miedo generado en los jueces ecuatorianos.

En resumidas cuentas, existen amplias pruebas de que los abogados que defienden a los DLA en el caso de Lago Agrio y sus aliados persiguieron deliberadamente una estrategia de intimidación y coerción contra la judicatura al menos hasta el punto de acusárselos de haber sobornado al juez de primera instancia, lo que tal vez hizo que fuera innecesario aplicar más intimidación.

*La Alianza Entre los DLA y el Gobierno Ecuatoriano y los Consiguietes
Riesgos para los Fulanos*

La Reapertura de las Acusaciones Penales Cerradas a Instancia de los DLA

Las tomas eliminadas de *Crude* incluyen una breve entrevista a Donziger mientras se dirigía a la inauguración del presidente Correa de enero del 2007. A los fines presentes, es relevante que Donziger presumió de que la inauguración del presidente Correa era un potencial “hecho crítico” para el resultado del litigio de Lago Agrio. Poco después, Donziger explicó que los DLA y la República del Ecuador se habían “estado ayudándonos bastante”⁶³ y discutió la importancia de trabajar en sus contactos con el gobierno.⁶⁴ Poco tiempo después, los DLA, en un segmento de radio, nombraron a los abogados de TexPet y los acusaron de ser “cómplices”, “ecuatorianos que a ellos más interesa ganar plata ... en vez de ser solidario

⁶² Decl. I de Hendricks, Anexo A, CRS-129-00-02.

⁶³ Decl. II de Hendricks, Anexo I, CRS-163-02-02.

⁶⁴ *Ibíd.*

con sus compatriotas que están dañados en sus vidas”.⁶⁵

La campaña continuó. Las tomas eliminadas muestran a Donziger y a otros planeando una conferencia de prensa para presionar al Fiscal General para que inicie una acción penal.⁶⁶ Al día siguiente, Donziger solicitó que se confeccionaran láminas de los “cuatro cómplices de Texaco”,⁶⁷ incluidos Pérez y Veiga — láminas que luego fueron mostradas en una conferencia de prensa y en una manifestación.

En marzo del 2007, el presidente Correa manifestó su total apoyo a los DLA.⁶⁸ Continuó esa manifestación con una reunión con Yanza. En una conversación telefónica alrededor del 23 de abril del 2007, Yanza informó a Donziger y a Fajardo acerca de una conversación que había tenido con el presidente Correa. Hasta donde se puede ver en las tomas eliminadas, Yanza dijo a Donziger que el presidente Correa estaba interesado en saber más acerca del supuesto daño ambiental y del “fraude ... en el campo”.⁶⁹ Agregó a Donziger que el presidente Correa “insist[ió]” que siga “pensando en hacer algo en la Fiscalía”.⁷⁰ Uno o dos días después, Yanza volvió a informar a Donziger y a Fajardo,

⁶⁵ *Ibíd.* Anexo 17.

⁶⁶ Decl. de Hendricks [DI 14, No. 10-MC-00002] (en adelante, “Decl. de Hendricks III”), Anexo 2, CRS-198-00-04.

⁶⁷ Decl. I de Hendricks, Anexo A, CRS-204-01-02.

⁶⁸ Decl. de Dans [DI 40, No. 10-MC-00002 (LAK)] (en adelante, “Decl. de Dans”) Anexo 12.

⁶⁹ *Ibíd.* Anexo 2, CRS-248-03-01.

⁷⁰ *Ibíd.*

afirmando en esa ocasión que Yanza había “coordina[do] todo” con el presidente Correa.⁷¹

En unos pocos días, el presidente Correa, Yanza, Fajardo y otros tomaron un helicóptero del gobierno juntos para ir a ver la región El Oriente.⁷² En una conversación en *Crude*, Donziger lanzó: “Hemos alcanzado algo muy importante en el caso. Ahora somos amigos del presidente”. La “amistad” enseguida se hizo aparente. El mismo día que visitó la región de El Oriente, el presidente Correa emitió un comunicado de prensa “insta[ndo] a la fiscalía que permita juzgar a los funcionarios de Petroecuador que aceptaron la remediación realizada por Texaco”.⁷³

El hecho de que no se hiciera mención a los abogados de TexPet aparentemente molestó a Donziger. En una conversación telefónica al día siguiente que fue tomada por las cámaras de Berlinger, Donziger dijo que “quizás ya es tiempo de llamar por la cabeza de Pérez Pallares—dado a lo que dijo el presidente”.⁷⁴ Al día siguiente, el presidente Correa emitió un llamado para que se acusara penalmente a los “‘*abogados vendepatrias*’ de Chevron-Texaco [...]”, además de acusar a los funcionarios de Petroecuador.⁷⁵

Finalmente, en una de las tomas eliminadas, Fajardo informó: “Entonces, el Presidente cree que si hacemos un poquito de esfuerzo, antes de meter el público, el Fiscal va a ceder, y va a reabrir

⁷¹ Decl. II de Hendricks, Anexo 4 (*Crude*), 1:03:03.

⁷² Partes de la visita del presidente Correa se ven en *Crude* y en las tomas eliminadas. Véase también *Ibíd.* Anexo 230A.

⁷³ Decl. de Dans Anexo 14.

⁷⁴ Decl. III de Hendricks, Anexo 1, CRS-268-00-01.

⁷⁵ Decl. de Dans., Anexo 13 (énfasis añadido).

esa investigación por el fraude de los—del contrato de Texaco y el Estado Ecuatoriano”.⁷⁶

El 30 de noviembre del 2007, la nueva Asamblea Constituyente de Ecuador, que para ese entonces era controlada por el presidente Correa,⁷⁷ destituyó al Fiscal General, que había sostenido que no había fundamento para acusar penalmente a los Peticionantes Individuales y a los antiguos funcionarios de la República de Ecuador, y lo reemplazó con el Dr. Washington Pesántez Muñoz. El Dr. Pesántez había sido el Fiscal de Distrito que había decidido en marzo del 2007 que “el informe sobre la auditoría especial llevada a cabo por el Controlador General de Ecuador [...] mostraba que no había pruebas de responsabilidad de naturaleza civil, administrativa o penal de parte de [...] los representantes de la compañía TEXACO, con respecto al daño ambiental que supuestamente había causado en la región de la Amazonía”.⁷⁸ Varios meses más tarde, sin embargo, el Dr. Pesántez decidió que la causa penal debía ser reabierta.⁷⁹

El 31 de marzo del 2008, menos de una semana después de que Cabrera informara una sentencia de daños y perjuicios por USD 16.000 millones y un día antes de que presentara su informe ante la corte, Pérez y Veiga recibieron una notificación de que el nuevo Fiscal General había reactivado las acusaciones penales sobre la base de “nuevas” pruebas.⁸⁰ El 31 de julio del 2008, los representantes de los DLA, incluido Donziger, realizaron una conferencia en la que Yanza comentó que los demandantes habían presentado pruebas a la Fiscalía General para motivar

⁷⁶ Decl. II de Hendricks, Anexo 1, CRS-376-03-01.

⁷⁷ *In re Chevron Corp.*, 749 F. Supp. 2d, p. 155.

⁷⁸ Decl. II de Hendricks, Anexo 394, en 9.

⁷⁹ Decl. de Dans Anexo 15.

⁸⁰ *Ibíd.*

la investigación.⁸¹ El presidente Correa, en una comunicación radial de menos de dos semanas después, ofreció su apoyo para las causas penales:

“Pero los gobiernos anteriores apoyaron a Texaco Chevron y traicionaron a nuestro pueblo: firmaron acuerdos que decían que estaba todo resuelto, lo cual ha sido uno de los principales argumentos de Texaco Chevron en su defensa, cuando en realidad no se resolvió nada. Ahora, el Fiscal General (Washington Pesántez), ha, muy correctamente, abierto una investigación para castigar a esa gente, porque se trató de una mentira: no hubo nada, no se resolvió nada, no se limpió nada, toda la contaminación”.⁸²

Finalmente, la reapertura de la causa parece haber fracasado. Los dos abogados que fueron acusados penalmente se unieron a Chevron en la búsqueda del descubrimiento de prueba en los Estados Unidos, en virtud del artículo 1782(a) del Código Judicial⁸³ a fin de defenderse en Ecuador. La Corte ordenó, entre otras cosas, la divulgación por parte de Donziger y sostuvo que él había perdido el derecho a beneficiarse del privilegio de confidencialidad en virtud del secreto profesional. Al dictar dicha resolución el 15 de diciembre del 2010, con una audiencia en la causa penal en Ecuador fijada para el 5 de enero del 2011, el Tribunal del Segundo Circuito manifestó:

“[C]omo este panel ha observado en el argumento oral y tal como ha afirmado la Corte de Distrito en muchas oportunidades en sus providencias, véase, por ejemplo, *En Chevron Corp.*, 749 F. Supp.2d 170, 173-75, 2010 WL 4922312, en pág. *2, la severidad de las consecuencias impuestas por la Corte de Distrito en este caso está justificada casi totalmente por la urgencia de la necesidad de los demandantes de obtener prueba a la luz de procesos penales pendientes en Ecuador.”⁸⁴

La posterior historia de la causa penal en Ecuador es instructiva. El 5 de enero del 2011, el abogado de los DLA informó al Tercer Circuito, que tenía una causa relacionada, que la audiencia

⁸¹ Decl. II de Hendricks, Anexo 224, en 5-6.

⁸² Decl. de Dans Anexo 23.

⁸³ 28 U.S.C. § 1782(a).

⁸⁴ *Lago Agrio Plaintiffs v. Chevron Corp.*, 409 Ap. F. 393, 395-96 (2do. Cir. 2010) (énfasis añadido).

en Ecuador “había sido pospuesta indefinidamente. A pesar de que luego fue reprogramada para el 2 de marzo, fue pospuesta nuevamente”.⁸⁵ Y luego fue supuestamente cancelada directamente en junio del 2011.⁸⁶ Si bien jamás sabremos qué fue exactamente lo que ocurrió, la interpretación probable de los hechos es que la demanda penal de los supuestos “abogados vendepatrias” llegó a ser inconveniente para los DLA y por eso el gobierno la abandonó.

* * *

En resumen, la República del Ecuador es una partidaria declarada de los DLA. Reabrió causas penales que habían sido cerradas tiempo atrás contra los antiguos abogados de TexPet en la instancia de los DLA. Y luego abandonó la causa cuando eso fue lo más conveniente para los intereses de los DLA. Dadas sus acciones pasadas con relación a este caso y sus acciones con relación a las críticas del actual régimen, que se tratan más adelante, sin mencionar las pruebas de otros usos y amenazas de uso del poder estatal para intimidar a las personas que ayudaban a Chevron que se analizan en el apéndice de esta sentencia, se justifica el temor de los declarantes de sufrir represalias de manos de su propio gobierno en caso de que se conozcan sus identidades.

El Ambiente Ecuatoriano Más Amplio

Cabe también tener en cuenta el ambiente en el que viven estos testigos confidenciales. Los antecedentes de Ecuador con relación al delito, la violencia, el cumplimiento de la ley y los procesos jurídicos dan lugar a duda respecto de si los testigos, en el caso de que se conocieran sus identidades en esta etapa, estarían protegidos frente a

⁸⁵ *In re Chevron Corp.*, 650 F.3d 276, 286 n.13 (3er. Cir. 2011).

⁸⁶ Véase Lawrence Hurley, *El levantamiento de las Acusaciones en Ecuador Podría Afectar la Acción de Chevron sobre Delincuencia Organizada*, *NY TIMES*, 3 de junio del 2011, disponible en <http://www.nytimes.com/gwire/2011/06/03/03greenwire-dropped-charges-in-ecuadorcould-affect-chevro-90134.html> (visitada por última vez el 20 de febrero del 2012).

represalias.

Primero, se ha informado ampliamente que el actual gobierno de Ecuador ha sido intolerante con el disenso, al menos en un caso bien conocido. En el caso de *El Universo*, tres ejecutivos de periódicos y un columnista fueron acusados criminalmente y declarados culpables de difamación y condenados a prisión y al pago de multas multimillonarias, supuestamente por declaraciones críticas sobre el presidente. A pesar de que los individuos fueron finalmente indultados, supuestamente todos se fueron de Ecuador.⁸⁷ Además, el presidente, al momento de confirmarse las condenas pero antes de los indultos, dijo que el caso era un precedente histórico y “que nadie tiene derecho a empañar la verdad”.⁸⁸

Segundo, cabe analizar las conclusiones del Departamento de Estados de los EE. UU. Entre las conclusiones incluidas en el Informe de País sobre Prácticas de Derechos Humanos para el 2011 en Ecuador se encuentran las siguientes:

- “[C] continuó habiendo denuncias creíbles respecto de que las fuerzas de seguridad, en particular

⁸⁷ *Periodistas ecuatorianos condenados en caso por difamación de Correa*, BBC NEWS, 21 de julio del 2011, *disponible en* <http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-14234695> (visitado por última vez el 19 de febrero del 2013); *Ataque de Ecuador a la libertad de prensa*, NY TIMES, 21 de febrero del 2012, *disponible en* http://www.nytimes.com/2012/02/22/opinion/ecuadors-assault-on-free-speech.html?_r=0 (visitado por última vez el 19 de febrero del 2013); *Se concedió asilo al periodista ecuatoriano Emilio Palacios en los EE. UU.*, BBC NEWS, 21 de agosto del 2012, *disponible en* <http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-19431682> (visitado por última vez el 19 de febrero del 2013); *Bozal a la prensa ecuatoriana*, Economist, 17 de febrero del 2012, *disponible en* <http://www.economist.com/blogs/americasview/2012/02/ecuadors-media> (visitado por última vez el 19 de febrero del 2013); *Correa indulta a los periodistas encarcelados por corte ecuatoriana por difamación*, El PAÍS, 1 de marzo del 2012, *disponible en* http://elpais.com/elpais/2012/03/01/inenglish/1330619576_394133.html (visitado por última vez el 19 de febrero del 2013).

⁸⁸ Mariano Costillo y Nelson Quinones, *El tribunal supremo de Ecuador confirma una condena de USD 40 millones por difamación*, CNN, 16 de febrero del 2012, *disponible en* <http://www.cnn.com/2012/02/16/world/americas/ecuador-libel-lawsuit> (visitado por última vez el 19 de febrero de 2013). El presidente Correa repetidamente elogió la decisión: “Hemos sentado un precedente. Esta sentencia y este proceso son históricos. Demuestran que nadie tiene derecho a empañar la verdad [...]. No solo es responsable la persona que lo escribió, sino también los directores que permitieron la ofensa y el diario en el que se imprimió”. *Ibíd.*

unidades de policía, utilizaron fuerza excesiva y cometieron asesinatos ilegítimos aislados”.

- “La Policía Nacional es responsable en virtud de la ley y en los hechos por la seguridad interna y el cumplimiento de la ley y se encuentra bajo la autoridad del Ministerio del Interior. La eficiencia de la Policía Nacional se vio perjudicada por la corrupción, los malos procesos de contratación y entrenamiento insuficiente, supervisión [insuficiente] y los recursos insuficientes”.
- “Las autoridades a cargo de determinar la validez de las detenciones admitían habitualmente a causas sin relevancia, ya sea porque estaban sobrecargadas de trabajo o porque el denunciante las sobornaba. El sistema fue frecuentemente utilizado como medio de acoso en causas civiles en las que una de las partes pretendía que se arrestara a la otra sobre la base de acusaciones penales”.
- “Si bien la constitución establece que debe haber una judicatura independiente, en la práctica la judicatura fue susceptible a las presiones y corrupción externas. La prensa informó sobre la susceptibilidad de la judicatura a ser sobornados para dictar sentencias favorables y acelerar la resolución de causas. Los jueces ocasionalmente adoptaron decisiones sobre la base de la influencia de la prensa o de presiones políticas y económicas”.
- “En algunos casos, el resultado de los juicios estaba predeterminado, y hubo denuncias creíbles de los demandantes y de la prensa respecto de que los veredictos dictados por los jueces no eran efectivamente escritos por ellos. En el juicio por difamación iniciado por el presidente Correa contra el diario *El Universo* [...], el juez a cargo publicó una sentencia de 156 páginas 25 horas después de la audiencia”.
- “El derecho establece sanciones penales por la corrupción de funcionarios. Sin embargo, el gobierno no implementó la ley efectivamente, y los funcionarios a veces participaron en prácticas corruptas impunemente”.
- “Los académicos y los analistas de centros de estudios dijeron que las causas judiciales no eran procesadas a menos que los funcionarios policiales y judiciales fueran sobornados”.

Del mismo modo, el asesoramiento de viaje para Ecuador del Departamento de Estado establece lo siguiente:

- “Dada la expansión de crimen organizado, tráfico de drogas y de armas ligeras e incursiones de organizaciones terroristas cerca de la frontera de Ecuador con Colombia, la embajada de los EE. UU. en Quito aconseja tener precaución al viajar al norte de Ecuador, incluidas las provincias de Sucumbíos, el norte de Orellana, Carchi y el norte de Esmeraldas. El personal del gobierno de los EE. UU. tiene prohibido viajar solo o hacer noche en dichas zonas”.
- “La delincuencia es un problema grave en Ecuador [...]. Las muy bajas tasas de detención y de condena de delincuentes, dados los limitados recursos policiales y judiciales, contribuyen a la alta tasa delictiva de Ecuador”.

Resumen sobre la Justa Causa

Sin decidir sobre la pregunta de si Guerra será un testigo creíble en juicio, el testimonio que se establece en su declaración es potencialmente devastador para los DLA, para sus abogados ecuatorianos y para el Sr. Donziger, así como para sus distintos socios y aliados. Su incentivo de intimidarlo y vengarse de él — y de cualquiera que corroborara su historia incluso en parte — es enorme. Los Fulanos simplemente serían blancos potenciales de intimidación, venganza y posiblemente cosas peores, si se conocieran sus identidades.

Es imposible obtener tranquilidad del comportamiento pasado de las potenciales fuentes de dichos comportamientos. Ya ha sido establecido que no existe cuestión genuina de hecho con respecto a la intimidación de un juez ecuatoriano por Fajardo y Donziger con la amenaza de presentar una denuncia disciplinaria si no seguía el plan de estos de poner fin a las inspecciones judiciales y designar al elegido por ellos, Cabrera, como perito global. Amenazaron abiertamente a Guerra y a Reyes con iniciar una demanda civil y una denuncia penal por haber rendido pruebas en esta causa. Anteriormente convencieron al gobierno ecuatoriano para que demandara penalmente a dos abogados ecuatorianos de Chevron. La determinación de los DLA de intimidar a los jueces ecuatorianos para salirse con las suyas surge claramente de las declaraciones hechas por sus abogados en *Crude* y en las tomas eliminadas. Y existen pocas razones para creer que cualquiera de estas personas podría verse constreñida por una decisión que pudiera dictar esta Corte para restringir su comportamiento si tomaran conocimiento de la identidad de los Fulanos.

Esta situación está compuesta tanto por la alianza entre los DLA y el gobierno ecuatoriano y la limitada efectividad del cumplimiento del derecho y de la judicatura ecuatorianos en el mejor de los casos. El presidente de Ecuador es partidario de los DLA y tuvo injerencia en la consecución de las causas penales ahora abandonadas en contra de dos de los abogados de Chevron, que incluyeron su incendiaria solicitud de juicio penal para los “abogados ‘vendepatrias’ de Chevron-Texaco [...]”.

El suplemento cerrado de esta decisión ofrece más razones de preocupación con relación a las represalias por parte del gobierno. Asimismo, al tiempo que se redacta este documento, Ecuador impugna una providencia altamente pertinente de un tribunal dictada por un panel de la Corte Permanente de Arbitraje.

En todas las circunstancias, la Corte considera que la divulgación de las identidades de los Fulanos del modo que sea que pudiera llevar a que sus identidades fueran conocidas por los DLA, sus abogados y aliados en Ecuador, incluido el gobierno ecuatoriano, probable y fundadamente resultaría en represalias contra ellos, así como esfuerzos de intimidarlos y así hacer que ellos cambien su testimonio. Existe justa causa para evitar dicha divulgación tanto tiempo como sea posible.

Acceso Público a Documentos Judiciales

Nuestro Circuito ha dejado en claro que en el sistema de Derecho Consuetudinario existe una presunción de acceso público a los documentos judiciales que puede ser superados por factores compensatorios, incluidos “los intereses de privacidad de quienes se oponen a la divulgación”,⁸⁹ que existe además una “derecho cualificado derivado de la Primera Enmienda a asistir a los procesos judiciales y de tener acceso a ciertos documentos judiciales”,⁹⁰ que el derecho calificado de la Primera Enmienda se extiende “a los documentos presentados con relación a la solicitud de sentencia sumaria”,⁹¹ que el peso de la presunción que favorece la disponibilidad pública de dichos documentos

⁸⁹ *Lugosch v. Pyramid Co. of Onondaga*, 435 F.3d 110, 119-20 (2do. Cir. 2006) (donde se cita *United States v. Amodeo*, 71 F.3d 1044, 1050 (2do. Cir. 1995) (“*Amodeo II*”) (se omiten las comillas internas)).

⁹⁰ *Lugosch*, 435 F.3d en 120 (donde se cita *HartfordCourant Co. v. Pellegrino*, 380 F.3d 83, 91 (2do. Cir. 2004) (se omiten las comillas internas)).

⁹¹ *Lugosch*, 435 F.3d en 124.

“es de las más altas”⁹² y que “los documentos pueden continuar de justificarse como restringidos solo ante decisiones específicas e incluidas en el expediente respecto de la necesidad de confidencialidad para preservar valores superiores y solo si la orden de confidencialidad está debidamente adaptada en sentido estricto para satisfacer ese objetivo”.⁹³ La Corte, por lo tanto, pasa a equilibrar la necesidad de protección de las identidades de los Fulanos y a la adecuación de la providencia.

El Equilibrio

En *Amodeo II*, el Circuito sostuvo que “el peso que corresponde otorgar a la presunción de acceso” está determinado por el lugar en el que se encuentra un documento en “un continuo de cuestiones que afectan directamente una adjudicación a cuestiones que entran en la competencia de un tribunal únicamente para asegurar su irrelevancia”.⁹⁴ En este caso se trata de dos declaraciones presentadas en respaldo de una solicitud de sentencia sumaria parcial. Y a pesar de que se sostuvo con cierta fuerza que el peso de la presunción de dichos documentos debería depender de si en última instancia cumplen un papel en la determinación de la solicitud, *Lugosch* sostuvo que el peso de la presunción que favorece la disponibilidad pública de dichos documentos “es de las más altas”.⁹⁵ Pero *Lugosch* dejó en claro también que la presunción, incluso en el caso de tener el mayor peso posible, puede ser vencida por “consideraciones contrapuestas”, incluidos los intereses de “privacidad de quienes

⁹² *Ibíd.* en 123.

⁹³ *Ibíd.* en 124.

⁹⁴ 71 F.3d en 1049.

⁹⁵ 435 F.3d en 123.

se oponen a la divulgación”⁹⁶ y la necesidad de “preservar valores superiores”.⁹⁷

En este caso, existen consideraciones de peso que respaldan la protección de las identidades de los Fulanos. Si sus identidades se hicieran conocidas en Ecuador, es casi seguro que se verían sujetos al vilipendio y a las represalias económicas de los DLA y sus aliados. Existe un riesgo significativo de dichas acciones por parte del gobierno. A pesar de que el expediente no establece que otros en situaciones similares hayan sido víctimas de violencia en el pasado, el clima en Ecuador, los riesgos de este litigio, la actitud de los que representan a los DLA en Ecuador y las características del cumplimiento del derecho ecuatoriano mencionadas por nuestro Departamento de Estado se combinan para justificar la conclusión de que el riesgo de violencia física no puede ser ignorado totalmente en el equilibrio de los intereses.⁹⁸ Finalmente, existe un interés público y privado importante de asegurar que aquellos que tengan conocimiento de lo ocurrido en Ecuador ofrezcan pruebas pertinentes. Como reconoció el Circuito en *Amodeo II*, las posibles consecuencias de la falta de protección de las identidades de fuentes confidenciales tales como estas pesan en favor de mantener dicha información fuera del alcance del público.⁹⁹

En todas las circunstancias, la Corte considera que los derechos de privacidad de los Fulanos, la necesidad

⁹⁶ *Ibíd.* en 120 (donde se cita *Amodeo II*, 71 F.3d en 1049-50).

⁹⁷ *Lugosch*, 435 F.3d en 120 (donde se cita *In re New York Times Co.*, 828 F.3d 110, 116 (2do. Cir. 1987) (se omiten las comillas internas)).

⁹⁸ En los casos en que existe preocupación con relación a la seguridad de los testigos, los tribunales de distrito pueden restringir el acceso de los demandados a la identidad del testigo o a otra información, tal como el domicilio del testigo. *Morgan v. Bennett*, 204 F.3d 360, 367 (2do. Cir. 2000); *United States v. Cavallaro*, 553 F.2d 300, 304 (2do. Cir. 1977).

⁹⁹ Véase *Amodeo II*, 71 F.3d en 1047-48, 1050 (“Si no es posible asegurar tal confidencialidad, la cooperación no será próxima.”).

Esto es así a pesar de que estas personas son fuentes confidenciales de Chevron y no de los funcionarios a cargo de hacer cumplir la ley, en particular a la luz del hecho de que el gobierno ecuatoriano está abiertamente alineado contra Chevron.

de protegerlos de la intimidación y de reprimendas económicas y físicas, y de asegurar en la medida de lo posible que los intereses privados y públicos de obtener la cooperación de los testigos con las pruebas pertinentes en este caso y en otros relacionados son valores superiores que superan el interés privado de los demandados y vencen la presunción de acceso público a los documentos judiciales en la medida en que las declaraciones de los Fulanos los identifiquen o contengan información que podría llevar a su identificación.

Adecuación de la Protección

En lo relativo al acceso público, la presunción ha sido superada solo en la medida en que los documentos presentados ante la Corte identifiquen a los Fulanos, directa o indirectamente. Sin embargo, las partes trataron los temas presentados ante esta Corte como una cuestión de “todo o nada”, efectivamente dando por sentado que la totalidad de las declaraciones de los Fulanos y la información editada que los identifica en otras declaraciones debería o no debería ser confidencial. Esa es la razón por la que la providencia dictada por la Corte el 14 de febrero tomó la forma que tuvo. De todos modos, la Corte acepta en teoría que puede haber partes de las declaraciones de los Fulanos que podría no ser confidenciales sin comprometer la protección debidamente concedida a las identidades de los Fulanos. Los demandados, cuyos procuradores en esta causa tienen copias de las declaraciones sin editar — son libres de presentar ante la Corte las partes no confidenciales de las declaraciones que ellos crean que podrían hacerse públicas sin riesgo sustancial de daño a valores superiores.

Los demandados también tienen un interés importante en preparar adecuadamente su acción para el juicio y, en particular, en prepararse para el testimonio de los Fulanos predicho por sus declaraciones. Ese interés se satisface, al menos en una medida sustancial y tal vez en forma completa, por el hecho de que su abogado patrocinador tiene las declaraciones confidenciales de los Fulanos y las declaraciones no editadas de otros testigos y, por lo tanto, puede preparar, sujeto siempre a sus deberes de no revelar las identidades de los Fulanos ni otra información que pueda llevar a su identificación. En la medida en que consideren que cierta

amorigeración en los términos de la orden es necesaria para fines específicos a fin de que puedan representar adecuadamente a sus clientes, son libres de solicitar a la Corte la eximición correspondiente en términos adecuados a los valores articulados aquí.

Una última cuestión. La solicitud de Chevron inicialmente persiguió una orden que impidiera a los demandados compartir la información en cuestión “con ninguna persona de Ecuador, salvo, en caso de que sea necesario, los dos Demandados de los DLA comparecientes, tras haberles comunicado su obligación por orden judicial de mantener la información en estricta confidencialidad”.¹⁰⁰ Por lo tanto, según los términos de la solicitud, Chevron aparentemente estaba dispuesta a permitir la divulgación de los dos Representantes de los DLA y a Donziger,¹⁰¹ en caso de ser necesario, con la seguridad de su promesa de cumplir con una orden judicial que los obligaba a mantener la confidencialidad de la información.

Los abogados de los Representantes de los DLA consideraron que eso era confuso en vista del deseo manifiesto de Chevron de evitar que se diseminara la información de los Fulanos en Ecuador.¹⁰² Cuando se le preguntó en los alegatos orales, el abogado de Chevron dijo que ella pensaba que el abogado de los demandados “podría compartir la información con su cliente [es decir, los Representantes de los DLA y Donziger] si sus clientes acepta[ban] mantener su confidencialidad de forma tal que no se hiciera pública ni fuera distribuida de ningún modo en Ecuador”.¹⁰³ Paradójicamente, sin embargo, luego dijo que (1) sería inadecuado enviar las declaraciones a Ecuador, (2) no se debía permitir a los Representantes de los DLA compartir la información con sus abogados ecuatorianos, (3) tanto Chevron como “[l]os testigos preferirían [...] que nadie de Ecuador

¹⁰⁰ DI 757, en 2.

¹⁰¹ Véase DI 769, en 10 & n.11.

¹⁰² Véase Tr., 4 de febrero del 2013, en 23-24

¹⁰³ *Ibíd.* en 41.

tuviera la información”, y (4) “[e]l objetivo [...] es procurar una solución a las preocupaciones sobre su seguridad manifestadas por los testigos, manteniendo sus identidades fuera de Ecuador y fuera del poder de personas que demostraron tener un patrón y una conducta de ataque contra los testigos”.¹⁰⁴

Si esta solicitud solo se refiriera a intereses privados de Chevron, no habría motivo para no aceptar su formulación original de la pretensión que busca — es decir, permitir la divulgación de la información a los Representantes de los DLA y a Donziger en caso de que fuera necesario, sujeto a su acuerdo de cumplir con las restricciones de confidencialidad. Pero los intereses de estos testigos sobre su seguridad personal y protección frente a represalias e intimidaciones, no sólo los intereses privados de Chevron, son los que se encuentran en juego aquí. La Corte no tendría medios efectivos de remediar ningún incumplimiento por parte de los Representantes de los DLA de las restricciones o su uso de la información de los Fulanos, suponiendo que les fuera divulgada a ellos, incluso si dicho incumplimiento pudiera ser atribuido a ellos inequívocamente. Las acciones de Donziger dejan lugar a duda respecto de que vaya a cumplir con los deberes de confidencialidad impuestos sobre él, al menos en las ocasiones en que esté en Ecuador. En interés de la seguridad y del bienestar de los testigos, la Corte, por tanto, ha otorgado la pretensión justificada en el expediente y en última instancia solicitada por Chevron a pesar de la confusión y de la incoherencia interna con la postura inicial de Chevron. En la medida en que los abogados luego considere que es necesaria la divulgación a los dos Representantes de los DLA o a Dozinger, pueden solicitar luego a la Corte el recurso necesario.

Sin embargo, habiendo analizado nuevamente la providencia del 14 de febrero, la Corte no considera que no se puede confiar en el cumplimiento de los términos de la orden de protección por parte de los demandados de Stratus. En consecuencia, de oficio y por providencia de la misma fecha, la Corte modifica la providencia del 14 de febrero en lo que concierne a su aplicación con relación a los demandados de Stratus.

¹⁰⁴ *Ibíd.* en 41—43.

Conclusión

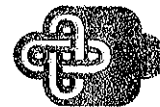
Lo que antecede establece el razonamiento y amplía las conclusiones sobre las que se funda la providencia de la Corte del 14 de febrero, y constituye conclusiones de hecho y de derecho a los fines de esta solicitud.

ASÍ SE ORDENA.

Fecha: 21 de febrero del 2013
Corregido: 21 de febrero del 2013, 11:55 a. m.

[firma]
Lewis Kaplan
Juez de Distrito de los
Estados Unidos

(La firma manuscrita que antecede no es una imagen de la firma contenida en el documento original del expediente judicial).



State of New York)
Estado de Nueva York)

County of New York)
Condado de Nueva York)

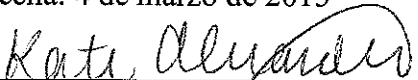
ss:
a saber:

Certificate of Accuracy
Certificado de Exactitud

This is to certify that the attached translation is, to the best of our knowledge and belief, a true and accurate translation from English into Spanish of the attached document.

Por el presente certifico que la traducción adjunta es, según mi leal saber y entender, traducción fiel y completa del idioma inglés al idioma español del documento adjunto.

Dated: March 4, 2013
Fecha: 4 de marzo de 2013

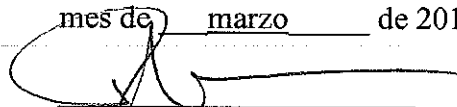


Kate Alexander
Project Manager – Legal Translations
Merrill Brink International/Merrill Corporation
[firmado]

Kate Alexander
Gerente de Proyecto – Traducciones Legales
Merrill Brink International/Merrill Corporation

Sworn to and signed before
Jurado y firmado ante
Me, this 4th day of
mí, a los 4 días del
March 2013
mes de marzo de 2013

ROBERT J. MAZZA
Notary Public, State of New York
No. 01MA5057911
Qualified in Kings County
Commission Expires April 1, 2014



Notary Public
Notario Público

[firmado]
[sello]

UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

----- x
CHEVRON CORPORATION,

Plaintiff,

-against-

11 Civ. 0691 (LAK)

STEVEN DONZIGER, et al.,

Defendants.
----- x

**MEMORANDUM OPINION
(CORRECTED)**

Appearances:

Randy M. Mastro
Andrea E. Neuman
Kristen L. Hendricks
Scott A. Edelman
William E. Thompson
GIBSON, DUNN & CRUTCHER, LLP
Attorneys for Plaintiff

John W. Keker
Elliot R. Peters
Christopher J. Young
Jan Nielsen Little
Matthew M. Werdeger
Nikki H. Vo
Paula L. Blizzard
William S. Hicks
KEKER & VAN NEST, LLP
Attorneys for Donziger Defendants

Julio C. Gomez
JULIO C. GOMEZ, ATTORNEY AT LAW LLC

Tyler G. Doyle
Craig Smyser
Larry R. Veselka
Christina A. Bryan
Garlard D. Murphy, IV
SMYSER KAPLAN & VESELKA, L.L.P.

*Attorneys for Defendants Hugo Gerardo, Camacho
Naranjo and Javier Piaguaje Payaguaje*

Benjamin H. Green
Michael Erik Sims
Stuart Alan Krause
ZEICHNER ELLMAN & KRAUSE LLP

Gordon Mehler
LAW OFFICES OF GORDON MEHLER, P.L.L.C.

Jessica R. Torbin
Joe L. Silver
Martin Beier
SILVER & DEBOSKEY, A PROFESSIONAL
CORPORATION

Attorneys for Stratus Consulting, Inc.

LEWIS A. KAPLAN, *District Judge*.

Plaintiff Chevron Corporation (“Chevron”) moved for a protective order preventing defendants from disclosing two witness declarations that have been filed under seal, from revealing or identifying information concerning the witnesses, except to counsel of record who have appeared in this action. The dispute that gave rise to the motion concerned principally whether the protection available under a previous protective order should be expanded to include, among other restrictions, the prohibition of disclosure of the witnesses’ identities and statements to Ecuadorian counsel in the Lago Agrio litigation, among others.

On February 14, 2013, the Court granted Chevron’s motion in significant part and entered a protective order barring defendants from disclosing either of the Doe declarations, or any identifying information about Doe 1 or Doe 2 that has been redacted from other declarations, to anyone other than counsel of record in this action except with prior leave granted on notice to plaintiff and upon such conditions as the Court may impose (the “February 14 order”).¹ This opinion explains the reasons for the Court’s action, amplifies its findings, and establishes a framework for additional tailoring to the order, should that prove appropriate, to ensure that the restriction on public access is no broader than is necessary.

Background

In order to understand the context of this motion, it is essential to have some of the

1

DI 802. The order is being modified in one respect by a separate filing today.

complex background of this case.

The Ecuadorian Judgment and this Litigation

An Ecuadorian court has entered an \$18.2 billion judgment (the “Judgment”) against Chevron Corporation (“Chevron”)² in an action brought by 47 individuals referred to as the Lago Agrio Plaintiffs (the “LAPs”), two of whom, Hugo Gerardo Camacho Naranjo and Javier Piaguaje Payaguaje (the “LAP Representatives”), have appeared in this action.³

Chevron brought this action against the LAPs, their lead U.S. attorney, Steven Donziger, and his law offices, and others involved in the Lago Agrio litigation.⁴ It claims in part that the Judgment is the product of fraud and violations of the Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (“RICO”). The RICO and, to some extent, the fraud claims rest on allegations that Donziger, a New York lawyer, and others based in the United States, here conceived, substantially executed, largely funded, and significantly directed a scheme to extort⁵ and defraud Chevron by,

2

DI 168 (Lago Agrio Judgment).

3

The other LAPs have defaulted and are not defending against this action. Hendricks Decl. [DI 206] ¶ 15 & Ex. 16 (Clerk’s certificate).

4

Chevron alleges also that various “co-conspirators” were part of the RICO enterprise, but they are not named as defendants.

5

Amended complaint (“Cpt.”) ¶ 1 (alleging that defendants “sought to extort defraud, and otherwise tortiously injure plaintiff Chevron by means of a plan they conceived and substantially executed in the United States.”); *id.* ¶ 2 (“The enterprise’s ultimate aim is to create enough pressure on Chevron in the United States to extort it into paying to stop the campaign against it.”).

among other things, (1) bringing the Lago Agrio case;⁶ (2) fabricating (principally in the United States) evidence for use in that lawsuit and corrupting and intimidating the Ecuadorian judiciary in order to obtain a tainted judgment;⁷ (3) exerting pressure on Chevron to coerce it to pay money not only by means of the Lago Agrio litigation and judgment, but also by subjecting Chevron to public attacks in the United States and elsewhere based on false and misleading statements;⁸ (4) inducing U.S. public officials to investigate Chevron;⁹ and (5) making false statements to U.S. courts and intimidating and tampering with witnesses in U.S. court proceedings to cover up their improper activities.¹⁰ The LAPs reportedly are pursuing proceedings to enforce the Judgment in at least Canada, Brazil, and Argentina, this being consistent with an apparent strategy “to pursue an aggressive world-wide enforcement strategy in order to obtain settlement leverage over Chevron.”¹¹

6

Id. ¶ 3.

7

E.g., id. ¶ 145 (“Back in the United States, preparations were well underway for drafting Cabrera’s report [the report of a supposedly independent, court-appointed expert].”); *id.* ¶ 151 (“While Stratus [LAP environmental consultant] was the primary coordinator of the . . . Cabrera Report, other members of the [LAP’s] U.S.-based team of experts . . . also contributed to the report without attribution in the report or disclosure to Chevron.”); *id.* ¶¶ 353–56; Mastro Decl. [DI 746] Ex. C (hereinafter “Guerra Decl.”).

8

Cpt. ¶ 214.

9

Id. (“And they have taken this pressure campaign to U.S. state and federal agencies, seeking their falsely induced assistance in this racketeering scheme.”); *id.* ¶ 216.

10

Id. ¶¶ 273–77, 291–300, 311–16.

11

Chevron Corp. v. Donziger, 768 F. Supp.2d 581, 622–24 (S.D.N.Y. 2011), *rev’d on other grounds sub nom. Chevron Corp. v. Naranjo*, 667 F.3d 232 (2d Cir. 2012), *cert. denied*, 133 S.Ct. 423 (2012).

The New Evidence – The LAPs’ Alleged Bribery of Ecuadorian Judge

The most recent development in this saga set the stage for Chevron’s motion. On January 28, 2013, Chevron submitted a declaration of Alberto Guerra Bastidas, a former judge of the Provincial Court of Sucumbios, Ecuador,¹² the Court that rendered the Judgment, and at one time the judge assigned to the case against Chevron. In summary, Guerra states that the LAPs’ counsel – Pablo Fajardo and Donziger – bribed the judge who signed the Ecuadorian Judgment to obtain their desired result and, in fact, supplied him with the decision, which the LAPs had written in all important respects.

Turning to the details, Guerra’s declaration, which is corroborated in some particulars by other publicly filed declarations,¹³ states that when Judge Nicholas Zambrano¹⁴ was assigned the Chevron case, he asked Guerra “to get in touch with the attorneys for Chevron in order to negotiate an agreement by which the company would pay Mr. Zambrano and [Guerra] for issuing the final

12

Mr. Guerra was dismissed as a judge in 2008, ostensibly for private statements to the effect that the case against Chevron should be dismissed. He avers, however, that the real reason for his dismissal was his confrontation of two judges who later served on the Chevron case “regarding several dubious and illegal rulings that had issued in the proceedings, and regarding their practice of asking the settling experts for 25 percent of their fees in consideration for having them appointed as such.” Guerra Decl. ¶ 6.

13

Mastro Decl. [DI 746] Ex. E (hereinafter “Callejas Decl.”); *id.* Ex. F (hereinafter “Racines Decl.”); *id.* Ex. G (hereinafter “Campuzano Decl.”), *id.* Ex. H (hereinafter “Carvajal Decl.”).

14

Judge Zambrano reportedly was removed from the bench after rendering the decision against Chevron “for releasing a suspected drug trafficker in an act of ‘obvious negligence or an inexcusable mistake.’” Eduardo Garcia and Alexandria Valencia, *Chevron Hopes to Benefit from Ecuador’s Judge Dismissal*, REUTERS (Mar. 12, 2012) (available at <http://www.reuters.com/article/2012/03/09/ecuador-chevron-idUSL2E8E9ETI20120309>) (last visited Feb. 17, 2013).

judgment in Chevron's favor."¹⁵ Guerra obliged, but Chevron rejected the overture. So Judge Zambrano, who had told Guerra that he already had reached an agreement with the LAPs' representatives "to quickly move the case along in their favor," suggested that Guerra meet with the LAPs' Ecuadorian lawyer, Fajardo.¹⁶ Guerra then met with Fajardo. They discussed the fact that Guerra already had an arrangement with Zambrano pursuant to which Guerra wrote Zambrano's decisions in civil cases. Guerra and Fajardo then agreed that (1) Guerra would make the Chevron case move quickly, (2) "Chevron's procedural options would be limited by not granting their motions on alleged essential errors in rulings [Guerra] was to write," and (3) the LAPs' "representatives would pay [Guerra] approximately USD \$1,000 per month for writing the court rulings Mr. Zambrano was supposed to write."¹⁷

This arrangement is said to have continued until Judge Zambrano was replaced on the Chevron case by a Judge Ordoñez.¹⁸ In time, however, a motion to recuse Judge Ordoñez in the Chevron case came before Judge Zambrano, which the latter allegedly "saw . . . as an opportunity to once again take control of the Chevron case, and asked [Guerra] to help him write the court ruling sustaining Judge Ordoñez's disqualification from the case."¹⁹ Judge Zambrano allegedly "saw this as

15

Guerra Decl. ¶ 12.

16

Id. ¶ 13.

17

Id.

18

Id. ¶ 20.

19

Id. ¶ 21.

an opportunity to once again approach Chevron's attorneys to see if they were willing to pay to have the case decided in their favor."²⁰ He dispatched Guerra to explore that possibility, but Chevron again rejected the overture.²¹

At that point, Judge Zambrano, according to Guerra, "suggested and authorized [Guerra] to seek an agreement with the Plaintiffs' representatives so that they could obtain a verdict in their favor, in exchange for a payment of at least USD \$500,000 to Mr. Zambrano; and whatever amount [Guerra] could negotiate or agree to for [himself]. The proposal entailed Plaintiffs writing a draft of the judgment and Judge Zambrano signing it and issuing it as his own."²² Guerra took the offer to Fajardo, who expressed interest and said that he would discuss it with Donziger. Later, Guerra received a call from Fajardo who asked him to a meeting with himself, Donziger, and Luis Yanza.²³ At that meeting, Guerra summarized the proposal. Donziger replied that they, the LAPs, did not then have that sum of money. Subsequently, however, Zambrano told Guerra that he had been in direct contact with Fajardo and that "the Plaintiffs' representatives had agreed to pay him USD \$500,000 from whatever money they were to collect on the judgment, in exchange for allowing them to write

20

Id. ¶ 22.

Judge Zambrano was appointed to replace Judge Ordoñez on the Chevron case in the fall of 2010. Carvajal Decl. ¶ 3.

21

Guerra Decl. ¶ 22.

22

Id. ¶ 23.

23

Yanza is the co-founder of the Amazon Defense Front ("ADF"), a non-profit organization that purports to represent the LAPs, and the general manager of Selva Viva, an Ecuadorian company that administers funds for the Lago Agrio litigation.

the judgment in Plaintiffs' favor."²⁴ Zambrano told Guerra that he would share the money with Guerra.²⁵

Guerra then resumed his role as Judge Zambrano's ghostwriter. When it came to the final judgment, however, Guerra relates that his role changed somewhat. About two weeks before the Judgment was issued, "Zambrano gave [Guerra] a draft of the judgment [that had been written by the attorneys for the plaintiffs and delivered to Zambrano] so that [Guerra] could revise it." Zambrano asked Guerra "to work on the document to fine-tune and polish it so it would have a more legal framework."²⁶ He did so at Zambrano's residence using Fajardo's computer.²⁷ He made few changes, making "it seem more like a judgment issued by the Sucumbios [*i.e.*, Lago Agrio] court."²⁸

When Guerra was through, he returned the document to Zambrano, which "was not too different from the one the Plaintiffs had given him." Zambrano told him that the LAPs' lawyers made changes to the judgment "up to the very last minute before it was published."²⁹

As noted, Guerra's account is corroborated in a number of respects by other

24

Guerra Decl. ¶ 23.

25

Id.

26

Id. ¶ 25.

27

Id.

28

Id. ¶¶ 26–27.

29

Id. ¶ 28.

declarations that recently were filed publicly.³⁰

This Court's Previous Rulings With Respect to the Fraud Allegations

Even before the Guerra declaration was filed, Chevron had presented substantial evidence of fraud in the procurement of the Judgment. In this regard, the Court incorporates by reference its July 2012 decision on Chevron's motion for partial summary judgment.³¹ Pertinent highlights are that this Court then concluded, on a record less complete than now is before it, that there was no genuine issue of fact as to at least the following:

- Donziger and Fajardo, the LAPs' principal Ecuadorian lawyer, coerced an Ecuadorian judge to (1) terminate the judicial inspections that previously had been ordered, (2) substitute a single global inspection to determine the extent of the alleged environmental damage, and (3) select a "global expert" chosen by the LAPs, Richard Cabrera, to conduct it. They did so by threatening the judge with the filing of a misconduct complaint if he failed to comply with their wishes.
- The report that Cabrera ultimately rendered:

"was not entirely or even predominantly his own work or that of any assistants or consultants working only for him. There is no genuine issue with respect to the facts that the LAP team secretly prepared his work plan, worked closely

³⁰

See generally Callejas Decl.; Racines Decl.; Campuzano Decl.; Carvajal Decl.

³¹

See Chevron Corp. v. Donziger, — F.Supp.2d —, 2012 WL 3538749 (S.D.N.Y. July 31, 2012).

with him in carrying it out, and drafted most of the report and its annexes. Nor is there any genuine issue regarding the fact that the LAP team then publicly objected to the very report that they, in large part, secretly had drafted as ‘unjustly favorable to [Chevron]’ and ‘too conservative’ in its damage assessment. The answers filed by Cabrera in response to the LAPs’ (and Chevron’s) objections – like the report itself – were drafted at least in substantial part by the LAP team and written to read as if Cabrera had written them. This uncontradicted evidence demonstrates that the report and subsequent responses filed in Cabrera’s name were tainted by fraud.”³²

- Portions of the Judgment, which supposedly had been written by Judge Zambrano, in fact were substantially identical to an internal memo prepared for the LAPs that was not part of the Ecuadorian court record.³³ Thus, at least part of the decision was written by the LAPs and adopted unchanged by the judge, all in secret. This conclusion, of course, preceded the Guerra declaration, which if true makes clear that the LAPs bribed Zambrano and Guerra to adopt a judgment written by the LAPs.
- The Judgment, although professing that it did not consider the Cabrera report, in fact relied on it at least to some extent.³⁴

Fraud Findings By Other Courts

Nor is this Court alone in finding substantial evidence of fraud.

Chevron, the LAPs, and others have been litigating Section 1782 and other discovery

³² *Chevron Corp.*, 2012 WL 3538749, at *33 (footnote omitted).

³³ *Id.* at *31.

³⁴ *Id.* at *33.

proceedings before other district courts around the country for well over a year. Persons resisting disclosure to Chevron in these proceedings, including the LAPs, typically have asserted claims of work product protection and attorney client privilege. Chevron has countered that any work product protection or attorney-client privilege has been overcome by the crime-fraud exception.

At this writing, at least six other federal district courts have concluded – all preceding the filing of the Guerra declaration and related materials – that Chevron established a *prima facie* case of fraud with respect to the procurement of the Judgment.³⁵

The Subjects of the Protective Order Motion

Guerra obviously is an important witness in this case. He claims that he was on the inside of a corrupt conspiracy to fix the case against Chevron and now says that he has revealed internal workings of the conspiracy.

In any case with a witness of this sort, one expects an attack on credibility. And just as in any other such case, corroboration of the witness's story can be very important.

Among the evidence that Chevron has submitted is declarations of two witnesses, Doe 1 and Doe 2, which have been filed under seal and made available only to the Court and counsel of record in this action. Both witnesses reside in Ecuador. Both fear reprisals against their families and

35

See Chevron Corp. v. Champ, No. 10-mc-27, 2010 WL 3418394, at *6 (W.D.N.C. Aug. 30, 2010); *In re Applic. of Chevron Corp.*, No. 10-cv-1146-IEG, 2010 WL 3584520, at *6 (S.D. Cal. Sept. 10, 2010); *In re Applic. of Chevron Corp.*, 633 F.3d 153, 166 (3d Cir. 2011); Transcript of Hearing at 43:13–44:16, *In re Applic. of Chevron Corp.*, No. cv-10-2675 (D.N.J. June 11, 2010), DI 33; *Chevron Corp. v. Salazar*, 275 F.R.D. 437, 442 (S.D.N.Y. 2011); Transcript of Hearing at 56:23–58:10, *Chevron Corp. v. Page*, No. RWT-11-1942 (D. Md. Jan. 25, 2013).

themselves. One of the declarations contains information that, if credited, would substantially corroborate Guerra. The other offers more modest corroboration but contains important information regarding the risk of reprisals against these and other witnesses.

Discussion

Defendants say that Federal Rule of Civil Procedure 26(c) authorizes the relief sought here on a showing of “good cause.” In any case, “[i]t is . . . fundamental that ‘[e]very court has supervisory power over its own records and files,’”³⁶ that it may seal them and prevent their disclosure in appropriate circumstances,³⁷ and that all such actions are informed by presumptions of public access to judicial records under the common law and the First Amendment. The Court begins from these premises.

³⁶

Gambale v. Deutsche Bank AG, 377 F.3d 133, 140–41 (2d Cir. 2004) (quoting *Nixon v. Warners Comm’ns, Inc.*, 435 U.S. 589, 598 (1978)).

³⁷

E.g., *Bridge C.A.T. Scan Assoc’s v. Technicare Corp.*, 710 F.2d 940, 945 (2d Cir. 1983); *Int’l Prods. Corp. v. Koons*, 325 F.2d 403, 407–08 (2d Cir. 1963) (“Whether or not the Rule itself authorizes so much of the order as also seals all affidavits submitted by defendants on various motions, we have no question as to the court’s jurisdiction to do this under the inherent ‘equitable powers of courts of law over their own process, to prevent abuses, oppression, and injustices,’ *Gumbel v. Pitkin*, 124 U.S. 131, 144, 8 S.Ct. 379, 31 L.Ed. 374 (1888); *Parker v. Columbia Broadcasting System*,[, 320 F.2d [937,] 938 [(2d Cir. 1963)].”).

Good Cause

As an initial matter, and putting to one side for the moment the presumptions of public access, district courts may issue protective and sealing orders to protect a party or person from “annoyance, embarrassment, oppression, or undue burden or expense,”³⁸ not to mention even graver concerns. Here, the disclosure of the identities of the Does to the LAPs and, especially their Ecuadorian counsel and allies, particularly at this juncture, would entail serious risks.

The LAPs’ Ecuadorian Counsel and Allies

Several considerations bear on the risk of disclosure to the LAPs and their Ecuadorian counsel and allies.

Refusal to Recognize or Comply With Orders of this Court

First, although Fajardo, Yanza, and all of the LAPs are defendants in this action, were duly served with process, all – save for the two LAP Representatives – have defaulted, thus waiving any jurisdictional defenses. Fajardo, Yanza, the ADF, and forty-five of the LAPs do not recognize either the jurisdiction of this Court or the binding effect of its orders.³⁹ Fajardo and others repeatedly

38

The burden of establishing good cause then is on the party seeking relief. *Gambale v. Deutsche Bank AG*, 377 F.3d 133, 142 (2d Cir. 2004).

39

See, e.g., Champion Decl. [DI 770] Ex. 2, at 2 (Fajardo “stated that Judge Kaplan does not have jurisdiction over the non-American lawyers or plaintiffs, and therefore he felt no obligation to comply with his order”granting the preliminary injunction.).

have refused to cooperate in discovery.⁴⁰ There is no reason to believe that they would comply with any restrictions that might be placed on their use of information regarding the Does or their other actions if the information were released either to the public generally or to these individuals in particular.

Threats to Other Witnesses

Second, Yanza and Fajardo already have threatened two other Chevron witnesses – Guerra and Reyes⁴¹ – with slander suits and criminal prosecution based on their submission of evidence in this Court.⁴² As previously determined, there is no genuine issue of material fact that

40

For example, despite the Court’s ruling in the Count 9 Action (11 Civ. 3718) that the LAPs’ attorneys were agents for their clients and that the LAP Representatives therefore were obliged to produce all documents in their custody or control, Fajardo, Yanza, and others persisted in their refusal to produce a single responsive document, claiming that Ecuadorian law prevents them from doing so. *See* DI 562, 563. Most recently, when Chevron noticed the deposition of Pablo Saenz – one of the LAPs’ Ecuadorian lawyers – counsel for the LAPs informed Chevron that Saenz refused to make himself available for deposition. *See* Champion Decl. [Ex. 770] Ex. 4; *see also* DI 778.

41

Ramiro Fernando Reyes Cisneros (“Reyes”) is an Ecuadorian petroleum and environmental engineer who claims that he was asked by Donziger and Fajardo to serve as the “independent” court-appointed global expert. After the team settled on Cabrera instead, Reyes claims to have been present at a meeting with Fajardo, Donziger, and Yanza during which they “dropped any pretense that Mr. Cabrera would act independently in writing an expert report that would be technically sound and executed according to professional standards.” Mastro Decl. [DI 658] Ex. 3014 (Reyes Decl.).

42

Neuman Decl. [DI. 796] Ex. 11, at 6 (Yanza – “we’re going to file legal actions against the, uh, former judge, uhm, of the Court [Guerra] and Mr. Reyes . . . because what they’re saying and doing is really, uh, slanderous or – or serious crimes *that affect the leaders, the case and the very government of Ecuador*”) (emphasis added); Ex. 12 (Fajardo - “We’ll file a criminal claim [against Guerra] here in Ecuador so that [he] will come and answer for a felony”).

Fajardo participated in coercing an Ecuadorian judge to terminate the judicial inspections and appoint Cabrera as the global expert by threatening the judge with a disciplinary complaint. In addition, as the foregoing shows, there is substantial evidence that at least Fajardo and Yanza bribed the trial judge in order to obtain a judgment favorable to the LAPs. According to Guerra, both Fajardo and Yanza personally participated in the meeting at which the bribery proposal was put to the plaintiffs by Guerra and it was Fajardo who later is said to have conveyed the counteroffer of the LAP Representatives for the corrupt bargain that Zambrano allegedly accepted. Now that Guerra's declaration is on the public record, Fajardo, Yanza, and their associates have enormous personal and economic stakes in attempting to protect themselves and the Judgment by attacking Guerra and anyone whose testimony could corroborate Guerra. And Fajardo has made clear that the LAP team closely monitors "people tied to Chevron" like Guerra and Reyes, so they can "know what they're doing and where they're traveling frequently."⁴³ Fajardo admitted, for example, that they found out about prior activities of Guerra by "ask[ing] for the information – the migration movements of Mr. Guerra . . . where he goes, and where he can be" found.⁴⁴

While the question whether Guerra's account is accurate will be decided on another day, the threats by Yanza and Fajardo against Reyes and Guerra as well as Fajardo's undisputed role in coercing the judge with respect to the judicial inspections and Cabrera's appointment, the persistent obstruction of discovery in this case, and virtually the entire record evidence a substantial risk that

43

Champion Decl. [DI 759] Ex. 3, at 4.

44

Id. at 4–5.

Fajardo, Yanza, and their associates would attempt to coerce, intimidate, and initiate reprisals against the Does if they learned their identities.

Intimidation of the Ecuadorian Courts

Third, the LAPs' strategy in Ecuador, at least until they bribed Judge Zambrano if indeed that is what occurred, was to intimidate the judiciary in order to obtain the result they wanted.

We have seen already that the LAPs, through Fajardo, brought pressure to bear on the Lago Agrio judge to secure adoption of their proposal for a global assessment and the selection of Cabrera as the court-appointed expert. But they did not stop there.

Donziger has served as the field general in what he describes in the *Crude* outtakes⁴⁵ as a “political battle . . . being played out through a legal case,”⁴⁶ a view that dovetails with his assessment of the Ecuadorian court system as corrupt and driven by politics. Donziger, Fajardo, Yanza, and the ADF have made determined efforts to intimidate the Ecuadorian judiciary. According to Donziger, it has been important to mobilize the country politically “so that no judge can rule against [the plaintiffs] and feel like he can get away with it in terms of his career.”⁴⁷ Donziger directed a member of the LAPs' legal team to “prepare a detailed plan with the necessary steps to attack the judge

45

A discussion of the film *Crude* and the outtakes is found in *In re Chevron Corp.*, 749 F. Supp. 2d 141, 146 (S.D.N.Y. 2010) *aff'd sub nom. Lago Agrio Plaintiffs v. Chevron Corp.*, 409 F. App'x 393 (2d Cir. 2010).

46

Hendricks Decl., [DI 41, No. 10–MC–00002 (LAK)] (hereinafter “Hendricks Decl. I”) Ex. A, CRS–060–00–04.

47

Id., CRS–032–00–01.

through legal, institutional channels and through any other channel [he could] think of.”⁴⁸ One example, depicted in part in *Crude*, shows Donziger and other LAP representatives traveling to an *ex parte* meeting with a judge on March 30, 2006. Prior to the meeting, Donziger described his plan to “intimidate,” “pressure,” and “humiliate” the judge:

“The only language that I believe this judge is gonna understand is one of pressure, intimidation and humiliation. And that’s what we’re doin’ today. We’re gonna let him know what time it is. . . . As a lawyer, I never do this. You don’t have to do it in the United States. It’s, it’s dirty. I hate it, hate it, but it’s necessary. I’m not lettin’ ‘em get away with this stuff.”⁴⁹

Donziger further explained to the film maker’s camera that:

“[T]he judicial system [in Ecuador] is so utterly weak. Like, the only way that you can secure a fair trial is if you do things like that. Like go in and confront the judge with media around. And fight, and yell, and scream, and make a scene. And, you know, that would never happen in the United States. That would never happen in any judicial system that had integrity.”⁵⁰

“They’re all [i.e., the Ecuadorian judges] corrupt! It’s—it’s their birthright to be corrupt.”⁵¹ “You can solve anything with politics as long as the judges are intelligent enough to understand the politics. . . . [T]hey don’t have to be intelligent enough to understand the law, just as long as they understand the politics.”⁵²

“[I]t’s a problem of institutional weakness in the judiciary, generally, and of this court,

48

Hendricks Decl., [DI 6, No. 11 Civ. 0691 (LAK)] (hereinafter “Hendricks Decl. II”) Ex. 96.

49

Hendricks Decl. I Ex. A, CRS–052–00–06. This is not the first time that Donziger deployed such a strategy. When an Ecuadorian judge would not allow Donziger to appear in court because he did not have his passport. Donziger instructed an Ecuadorian attorney to lie and say that the judge called Donziger a “gringo.” *Id.*, CRS–046–02–01.

50

Id., CRS–053–02–01.

51

Id., CRS–053–02–03.

52

Hendricks Decl. II Ex. 1, CRS–129–00–02.

in particular. . . . We believe they make decisions based on who they fear the most, not based on what the laws should dictate.”⁵³

In addition, among the events filmed by the crew was a conversation between Donziger and Fajardo in which the two discussed the need to “be more and more aggressive” and to “organize pressure demonstrations at the court.” In the same clip, Donziger referred to the litigation as a “matter of combat” that requires “actually . . . put[ting] an army together.”⁵⁴

The *Crude* outtakes captured a June 6, 2007 meeting in which Donziger outlined a strategy to pressure the Ecuadorian court. Donziger told those present that the LAPs needed to “do more, politically, to control the court, to pressure the court” because Ecuadorian courts “make decisions based on who they fear most, not based on what the laws should dictate.”⁵⁵ Donziger expressed concern that no one feared the plaintiffs, and he stated that the plaintiffs would not win unless the courts began to fear them.⁵⁶ He described also his desire to take over the court with a massive protest as a way to send a message to the court of “don’t fuck with us anymore—not now, and not—not later, and never.”⁵⁷ He then proposed raising “our own army” to which Yanza interjected “a

53

Hendricks Decl. I Ex. A, CRS–350–04–01.

54

Id., CRS–346–00–02.

55

Id., CRS–350–04–01.

56

Id.

57

Id.

specialized group . . . for immediate action.”⁵⁸ The conversation about raising an army to pressure the court then continued, with Yanza waving the camera away as he told Donziger that the “army” could be supplied with weapons.⁵⁹

Two days later, speaking directly to the camera, Donziger continued to emphasize the importance of pressuring the judge in the Lago Agrio litigation. According to Donziger, the plaintiffs’ “biggest problem” to that point had been their inability to pressure the judge. He explained that suing Chevron for moral damages or pressuring the Prosecutor General to open criminal investigations was not sufficient to make the judge feel pressure.⁶⁰ Donziger asserted that the plaintiffs needed to do things that the judge would “really feel” such as having the president of the country or the supreme court “call[] him out,” implying that Donziger and others could develop strategies that would result in such actions. Later that month, Donziger asked Berlinger and his crew to film the LAPs’ “private ‘army,’” which he characterized as being “very effective” because “it followed a Texaco lawyer into the judge’s chambers and had a confrontation” “a critical part of [the] strategy . . . allowing the case to go forward”⁶¹

Finally, Donziger participated in a dinner conversation about what might happen to a judge who ruled against the LAPs. One or more other participants in the conversation suggested that

58

Id., CRS–350–04–02.

59

Id.

60

Id., CRS–376–04–01.

61

Hendricks Decl. II Ex. 99, at 1.

a judge would be “killed” for such a ruling. Donziger replied that the judge “might not be [killed], but he’ll think—he thinks he will be . . . [w]hich is just as good.”⁶² The comment reveals at least Donziger’s desire to benefit from fear engendered in the Ecuadorian judges.

In sum, there is ample evidence that the LAPs’ counsel in the Lago Agrio case and allies deliberately pursued a strategy of intimidation and coercion aimed at the judiciary at least until the point at which they are alleged to have bribed the trial judge, thus perhaps making further intimidation unnecessary.

*The Alliance Between the LAPs and the Ecuadorian Government and the
Consequent Risks to the Does*

The Reopening of Closed Criminal Allegations at the LAPs’ Instance

The *Crude* outtakes include a brief interview with Donziger on his way to President Correa’s January 2007 inauguration. For present purposes, it is relevant that Donziger boasted that President Correa’s inauguration was a potentially “critical event” for the outcome of the Lago Agrio litigation. Soon thereafter, Donziger explained that the LAPs and the ROE had “been really helping each other”⁶³ and discussed the importance of working his contacts in the new government.⁶⁴ A short time later, the LAPs, in a radio segment, named TexPet’s attorneys and accused them of being “accomplices,” “Ecuadorians who are more interested in making money than on showing solidarity

62

Hendricks Decl. I Ex. A, CRS–129–00–02.

63

Hendricks Decl. I Ex. I, CRS–163–02–02.

64

Id.

towards their fellow countrymen whose lives are in peril.”⁶⁵

This campaign continued. The outtakes show Donziger and others planning a press conference to pressure the Prosecutor General to bring criminal charges.⁶⁶ On the following day, Donziger asked that posters be made of “Texaco’s four accomplices,”⁶⁷ including Pérez and Veiga—posters that later were displayed at a press conference and a demonstration.

In March 2007, President Correa pledged his full support for the LAPs.⁶⁸ He followed that pledge with a meeting with Yanza. In a telephone conversation on or about April 23, 2007, Yanza reported to Donziger and Fajardo on a conversation he had had with President Correa. To the extent that his report may be gleaned from the outtakes, Yanza told Donziger that President Correa had an interest in learning more about the alleged environmental harm and “fraud . . . in the field.”⁶⁹ He added to Donziger that President Correa “insist[ed]” that he continued to “[think] about doing something in the Prosecutor’s Office.”⁷⁰ A day or two later, Yanza again reported to Donziger and Fajardo,

⁶⁵

Id. Ex. 17.

⁶⁶

Hendricks Decl., [DI 14, No. 10–MC–00002] (hereinafter “Hendricks Decl. III”) Ex. 2, CRS–198–00–04.

⁶⁷

Hendricks Decl. I Ex. A, CRS–204–01–02.

⁶⁸

Dans Decl., [DI 40, No. 10–MC–00002 (LAK)] (hereinafter “Dans Decl.”) Ex. 12.

⁶⁹

Id. Ex. 2, CRS–248–03–01.

⁷⁰

Id.

asserting on that occasion that Yanza had “coordinat[ed] everything” with President Correa.⁷¹

Within a few days, President Correa, Yanza, Fajardo, and others boarded a government helicopter together to tour the Oriente region.⁷² In a voiceover in *Crude*, Donziger bragged: “We have achieved something very important in the case. We are now friends with the President.” That “friendship” immediately became apparent. On the same day as his visit to the Oriente region, President Correa issued a press release “urg[ing] the Office of the Prosecutor to permit the Prosecution of the Petroecuador officials who accepted the remediation carried out by Texaco.”⁷³

The fact that there was no mention of the TexPet lawyers apparently bothered Donziger. In a telephone conversation the next day that was captured in the *Crude* outtakes, Donziger said that “perhaps it is time to ask for the head of Pérez Pallares—given what the President said.”⁷⁴ On the following day, President Correa broadcast a call for the criminal prosecution of “Chevron–Texaco . . . ‘homeland-selling lawyers’” in addition to the prosecution of Petroecuador officials.⁷⁵

Finally, in one of the outtakes, Fajardo reported: “So, the President thinks that if we put in a little effort, before getting the public involved, the Prosecutor will yield, and will re-open that

71

Hendricks Decl. II Ex. 4 (*Crude*), 1:03:03.

72

Portions of President Correa’s visit are depicted in *Crude* and the outtakes. *See also id.* Ex. 230A.

73

Dans Decl. Ex. 14.

74

Hendricks Decl. III Ex. 1, CRS–268–00–01.

75

Dans. Decl. Ex. 13 (emphasis added).

investigation into the fraud of–of the contract between Texaco and the Ecuadorian Government.”⁷⁶

On November 30, 2007, Ecuador’s then new Constituent Assembly, which was controlled by President Correa,⁷⁷ removed the Prosecutor General, who had found no basis to support criminal charges against the Individual Petitioners and former ROE officials, and replaced him with Dr. Washington Pesántez Muñoz. Dr. Pesántez had been the District Prosecutor who had decided in March 2007 that “the report on the special audit conducted by the Comptroller General of Ecuador . . . showed that there was no evidence of civil, administrative or criminal nature liability on the part of . . . representatives of the TEXACO company, with respect to environmental damage that had allegedly been caused in the Amazon region.”⁷⁸ Several months later, however, Dr. Pesántez decided that the criminal case should be reopened.⁷⁹

On March 31, 2008, less than a week after Cabrera reported a damages finding of \$16 billion and a day before he filed his report with the court, Pérez and Veiga received notice that the new Prosecutor General had reactivated the criminal charges based on “new” evidence.⁸⁰ On July 31, 2008, representatives of the LAPs, including Donziger, held a press conference during which Yanza commented that the plaintiffs had presented evidence to the Prosecutor General’s office to encourage

⁷⁶

Hendricks Decl. II Ex. 1, CRS–376–03–01.

⁷⁷

In re Chevron Corp., 749 F.Supp.2d at 155.

⁷⁸

Hendricks Decl. II Ex. 394, at 9.

⁷⁹

Dans Decl. Ex. 15.

⁸⁰

Id.

an investigation.⁸¹ President Correa, in a radio address less than two weeks later, offered his support for the criminal prosecutions:

“But previous governments supported Texaco Chevron and betrayed our people: they signed agreements saying that everything was resolved, which has been one of the principal arguments by Texaco Chevron in its defense, when in fact nothing was resolved. Now, the Prosecutor General (Washington Pesántez), has, very properly, opened an investigation to punish those people, because it was a lie: there was nothing, nothing resolved, nothing cleaned up, of all the pollution.”⁸²

In the end, the reopening of the prosecution appears to have backfired. The two lawyers who were charged criminally joined with Chevron in seeking discovery in the United States under Section 1782(a) of the Judicial Code⁸³ in order to defend themselves in Ecuador. This Court ordered, among other things, disclosure by Donziger and concluded that he had forfeited any work product or attorney-client privilege. In affirming that ruling on December 15, 2010, with a hearing in the Ecuadorian criminal case scheduled for January 5, 2011, the Second Circuit wrote:

“[A]s this panel observed at oral argument and the District Court stressed several times in its orders, *see, e.g., In re Chevron Corp.*, 749 F. Supp.2d 170, 173–75, 2010 WL 4922312, at *2, *the severity of the consequences imposed by the District Court in this case are justified almost entirely by the urgency of petitioners’ need for the discovery in light of impending criminal proceedings in Ecuador.*”⁸⁴

The subsequent history of the criminal case in Ecuador is instructive. On January 5, 2011, the LAPs’ counsel advised the Third Circuit, which was hearing a related matter, that the hearing

81

Hendricks Decl. II Ex. 224, at 5–6.

82

Dans Decl. Ex. 23.

83

28 U.S.C. § 1782(a).

84

Lago Agrio Plaintiffs v. Chevron Corp., 409 F. App’x 393, 395-96 (2d Cir. 2010) (emphasis added).

in Ecuador “had been postponed indefinitely. Though it was later rescheduled for March 2, it was postponed yet again.”⁸⁵ And then it reportedly was dropped altogether in June 2011.⁸⁶ While we may never know exactly what occurred, the probable interpretation of the events is that the criminal prosecution of the allegedly “homeland-selling lawyers” became inconvenient to the LAPs and so the government abandoned it.

* * *

In sum, the Republic of Ecuador is an avowed supporter of the LAPs. It reopened long closed criminal accusations against former TexPet lawyers at the LAPs’ instance. And then abandoned the case when that served the LAPs’ interests. Given its past actions with respect to this case and its actions with respect to critics of the current regime that are discussed below, not to mention the evidence of other uses and threatened uses of state power to intimidate persons assisting Chevron that is discussed in the sealed supplement to this decision, the declarants are justified in fearing reprisals at the hands of their own government if their identities become known.

The Broader Ecuadorian Environment

Account must be taken also of the environment in which these confidential witnesses live. Ecuador’s record with respect to crime, violence, law enforcement, and the legal process gives little comfort that these witnesses, were their identities revealed at this stage, would be safe from

⁸⁵

In re Chevron Corp., 650 F.3d 276, 286 n.13 (3d Cir. 2011).

⁸⁶

See Lawrence Hurley, *Dropping Charges in Ecuador Could Affect Chevron Racketeering Case*, *NY TIMES*, June 3, 2011, available at <http://www.nytimes.com/gwire/2011/06/03/03greenwire-dropped-charges-in-ecuador-could-affect-chevro-90134.html> (last visited Feb. 20, 2012).

retribution.

First, it has been reported widely that the current government of Ecuador has been intolerant of dissent, at least in one well known incident. In the *El Universo* case, three newspaper executives and a columnist were criminally prosecuted for and convicted of criminal defamation and sentenced to jail terms and multimillion dollar fines, reportedly for statements critical of the president. Although the individuals eventually were pardoned, all reportedly fled Ecuador.⁸⁷ Moreover, the president, on the occasion of the affirmance of the convictions but before the pardons, said that the case was an historic precedent and “that nobody has the right to tarnish the truth.”⁸⁸

Second, it is well to consider conclusions reached by the U.S. Department of State. Among the findings set out in the 2011 Country Report on Human Rights Practices in Ecuador are these:

- “[T]here continued to be credible reports that security forces, particularly

87

Ecuador journalists convicted in Correa libel case, BBC NEWS, July 21, 2011, available at <http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-14234695> (last visited Feb. 19, 2013); *Ecuador’s Assault on Free Speech*, NY TIMES, Feb. 21, 2012, available at http://www.nytimes.com/2012/02/22/opinion/ecuadors-assault-on-free-speech.html?_r=0 (last visited Feb. 19, 2013); *Ecuador journalist Emilio Palacios granted asylum in the US*, BBC NEWS, Aug. 21, 2012, available at <http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-19431682> (last visited Feb. 19, 2013); *Ecuador’s media Muzzled*, Economist, Feb. 17, 2012, available at <http://www.economist.com/blogs/americasview/2012/02/ecuadors-media> (last visited Feb. 19, 2013); *Correa pardons journalists jailed by Ecuadorian court for libel*, EL PAÍS, March 1, 2012, available at http://elpais.com/elpais/2012/03/01/inenglish/1330619576_394133.html (last visited Feb. 19, 2013).

88

Mariano Costillo and Nelson Quinones, *Ecuador high court upholds \$40 million libel suit*, CNN, Feb. 16, 2012, available at <http://www.cnn.com/2012/02/16/world/americas/ecuador-libel-lawsuit> (last visited Feb. 19, 2013). President Correa repeatedly praised the ruling: “We have set a precedent. This sentence and this process are historic. They demonstrate that nobody has the right to tarnish the truth Not only is the person who wrote it responsible, but also the directors who allowed the offense and the newspaper where it was printed.” *Id.*

police units, used excessive force and committed isolated unlawful killings.”

- “The National Police are responsible in law and practice for internal security and law enforcement and are under the authority of the Ministry of Interior. National Police effectiveness was impaired by corruption, poor hiring procedures, and insufficient training, supervision, and resources.”
- “Authorities charged with determining the validity of detention often allowed frivolous charges to be brought, either because they were overworked or because the accuser bribed them. The system frequently was used as a means of harassment in civil cases in which one party sought to have the other arrested on criminal charges.”
- “While the constitution provides for an independent judiciary, in practice the judiciary was susceptible to outside pressure and corruption. The media reported on the susceptibility of the judiciary to bribes for favorable decisions and faster resolution of legal cases. Judges occasionally reached decisions based on media influence or political and economic pressures.”
- “In some cases the outcome of trials appeared predetermined, and there were credible allegations by defendants and the press that verdicts delivered by judges were not actually written by them. In the libel suit brought by President Correa against the newspaper *El Universo* . . . , the presiding judge published a 156-page decision 25 hours after the hearing.”
- “The law provides criminal penalties for official corruption. However, the government did not implement the law effectively, and officials sometimes engaged in corrupt practices with impunity.”
- “Academics and think tank analysts said that legal cases were not processed unless the police and judicial officials were bribed.”

Likewise, the State Department’s travel advisory for Ecuador states the following:

- “Due to the spread of organized crime, drug and small-arms trafficking, and incursions by terrorist organizations near Ecuador’s border with Colombia, the U.S. Embassy in Quito advises caution when traveling to northern Ecuador, including the provinces of Sucumbios [the province containing Lago Agrio], northern Orellana, Carchi, and northern Esmeraldas. U.S. government personnel are prohibited from traveling alone or staying overnight in these areas.”
- “Crime is a severe problem in Ecuador. . . . Very low rates of apprehension and conviction of criminals – due to limited police and judicial resources – contribute to Ecuador’s high crime rate.”

Summary as to Good Cause

Without passing on the question whether Guerra will prove a credible witness at trial, the testimony set out in his declaration is potentially devastating to the LAPs, to their Ecuadorian counsel and Mr. Donziger, and to their various associates and allies. Their incentive to intimidate and retaliate against him – and against anyone who corroborates his story even in part – is enormous. The Does plainly would be potential targets of intimidation, retribution, and conceivably worse if their identities became known.

No comfort can be taken from the past behavior of the potential sources of such behavior. It already has been determined that there is no genuine issue of fact with respect to the intimidation of an Ecuadorian judge by Fajardo and Donziger with the threat of a disciplinary complaint if he did not go along with their plan to end the judicial inspections and appoint their choice, Cabrera, as the global expert. They have openly threatened Guerra and Reyes with civil litigation and criminal prosecution for providing evidence in this case. They previously prevailed upon the Ecuadorian government to prosecute two of Chevron's Ecuadorian counsel criminally. The LAPs' determination to intimidate Ecuadorian judges to get their way is evident from statements made by their lawyers in *Crude* and the video outtakes. And there is little reason to suppose that any of these individuals could be constrained by any order this Court might issue to restrict their behavior if the identity of the Does became known to them.

This situation is compounded both by the alliance between the LAPs and the Ecuadorian government and the limited effectiveness of Ecuadorian law enforcement and judiciary in the best of circumstances. The president of Ecuador is an advocate for the LAPs and played a role in securing the now abandoned criminal prosecution of two of Chevron's attorneys that included his inflammatory broadcast call for the criminal prosecution of "Chevron–Texaco . . . 'homeland-selling

lawyers.’” The sealed supplement to this decision provides other reasons for concern with respect to reprisals by the government. Moreover, Ecuador as this is written is defying a highly pertinent order of a tribunal issued by a panel of the Permanent Court of Arbitration.

In all the circumstances, the Court finds that the disclosure of the Does’ identities in any manner that could lead to their identities being learned by the LAPs, their counsel and allies in Ecuador, including the Ecuadorian government, is substantially likely to result in reprisals against them as well as efforts to intimidate them and thus to cause them to alter their testimony. There is good cause for preventing any such disclosure for as long as possible.

Public Access to Judicial Documents

Our Circuit has made clear that there is a common law presumption of public access to judicial documents which may be overcome by countervailing factors including “the privacy interests of those resisting disclosure,”⁸⁹ that there is in addition a “qualified First Amendment right to attend judicial proceedings and to access certain judicial documents,”⁹⁰ that the qualified First Amendment right extends “to documents submitted to the court in connection with a summary judgment motion,”⁹¹ that the weight of the presumption favoring public availability of such documents

89

Lugosch v. Pyramid Co. of Onondaga, 435 F.3d 110, 119–20 (2d Cir. 2006) (quoting *United States v. Amodeo*, 71 F.3d 1044, 1050 (2d Cir. 1995) (“*Amodeo II*”) (internal quotation marks omitted)).

90

Lugosch, 435 F.3d at 120 (quoting *Hartford Courant Co. v. Pellegrino*, 380 F.3d 83, 91 (2d Cir. 2004) (internal quotation marks omitted)).

91

Lugosch, 435 F.3d at 124.

“is of the highest,”⁹² and that “continued sealing of [such] documents may be justified only with specific, on-the-record findings that sealing is necessary to preserve higher values and only if the sealing order is narrowly tailored to achieve that aim.”⁹³ The Court therefore turns to balancing the need for protection of the identities of the Does and to the tailoring of the order.

The Balance

In *Amodeo II*, the Circuit stated that “the weight to be given the presumption of access” is determined by where a particular document falls along “a continuum from matters that directly affect an adjudication to matters that come within a court’s purview solely to insure their irrelevance.”⁹⁴ We deal here with two declarations submitted in support of a motion for partial summary judgment. And though it has been argued with some force that the weight of the presumption for such documents ought to depend on whether they ultimately play a role in the determination of the motion, *Lugosch* stated that the weight of the presumption favoring public availability of such documents “is of the highest.”⁹⁵ But *Lugosch* made clear also that the presumption, even at its weightiest, may be overcome by “competing considerations” including but not limited to “the privacy interests of those

92

Id. at 123.

93

Id. at 124.

94

71 F.3d at 1049.

95

435 F.3d at 123.

resisting disclosure”⁹⁶ and the need “to preserve higher values.”⁹⁷

In this case, there are weighty considerations that support protection of the identities of the Does. If their identities become known in Ecuador, it is all but certain that they will be subjected to vilification and economic reprisals by the LAPs and their allies. There is a significant risk of such actions by the government. Although the record does not establish that others in similar positions have been victims of violence in the past, the climate in Ecuador, the stakes of this litigation, the attitude of those representing the LAPs in Ecuador, and the characteristics of Ecuadorian law enforcement noted by our State Department combine to justify the finding that the risk of physical violence cannot be disregarded entirely in the balance of interests.⁹⁸ Finally, there is an important public and private interest in ensuring that those with knowledge of whatever went on in Ecuador come forward with pertinent evidence. As the Circuit recognized in *Amodeo II*, the likely consequences of failure to protect the identities of confidential sources such as these weigh in favor of keeping that information from the public.⁹⁹

In all the circumstances, the Court finds that the privacy interests of the Does, the need

96

Id. at 120 (quoting *Amodeo II*, 71 F.3d at 1049–50).

97

Lugosch, 435 F.3d at 120 (quoting *In re New York Times Co.*, 828 F.3d 110, 116 (2d Cir. 1987) (internal quotation marks omitted)).

98

Where there are concerns for witness safety, a district court may restrict a defendant's access to the witness's identity or other information, such as the witness's address. *Morgan v. Bennett*, 204 F.3d 360, 367 (2d Cir. 2000); *United States v. Cavallaro*, 553 F.2d 300, 304 (2d Cir. 1977).

99

See Amodeo II, 71 F.3d at 1047–48, 1050 (“ If . . . confidentiality cannot be assured, cooperation will not be forthcoming.”).

This is so notwithstanding that these individuals are confidential sources of Chevron rather than of law enforcement officials particularly in light of the fact that the Ecuadorian government is openly aligned against Chevron.

to safeguard them from intimidation and economic and physical reprisals, and ensuring as far as possible that the public and private interests in obtaining the cooperation of witnesses with pertinent evidence in this and related cases are higher values that outweigh the private interests of the defendants and overcome the presumption of public access to judicial documents to the extent that the Doe declarations identify them or contain information that would be likely to lead to their identification.

Tailoring the Protection

So far as public access is concerned, the presumption has been overcome only to the extent that the documents filed with the Court would identify the Does, directly or indirectly. Yet the parties have addressed the issues before the Court on an all or nothing basis, effectively assuming that the entirety of Doe declarations and the redacted identifying information in other declarations either should or should not be sealed. That is why the Court's February 14 order took the form it did. Nonetheless, the Court accepts in theory that there may be parts of the Doe declarations that could be unsealed without compromising the protection properly afforded to the Does identities. Defendants – whose counsel of record in this action have copies of the unredacted declarations – are free to apply to the Court to unseal portions of the declarations that they believe could be made public without material risk of harm to higher values.

Defendants also have an important interest in properly preparing this action for trial and, in particular, in preparing to meet the testimony of the Does that is foretold by their declarations. That interest is served, at least to a very important extent and perhaps fully, by the fact that their counsel of record have the sealed declarations of the Does and the unredacted declarations of other witnesses and thus can prepare, subject always to their duties not to reveal the identities of the Does or any information that might lead to their identification. To whatever extent they feel that some

relaxation of the terms of the order is needed for specific purposes in order for them properly to serve their clients, they are free to apply to the Court for appropriate relief on terms consistent with the values articulated here.

One final point. Chevron's motion initially sought an order blocking defendants from sharing the information in question "with anyone in Ecuador, other than, if necessary, the two appearing LAP Defendants, after making them aware of their court-ordered obligation to maintain the strict confidentiality of the information."¹⁰⁰ Thus, as the motion was drafted, Chevron apparently was willing to permit disclosure to the two LAP Representatives and to Donziger,¹⁰¹ if that were necessary, in reliance on their promise to comply with a court order requiring them to maintain the information in confidence.

The LAP Representatives' counsel found that confusing in view of Chevron's stated desire to avoid having the Doe information disseminated in Ecuador.¹⁰² When queried at oral argument, Chevron's counsel said that she thought that the defendants' counsel "need to share the information with their client [i.e., the LAP Representatives and Donziger] if their clients agree[d] to keep it confidential in a way where it cannot be made public or otherwise distributed in Ecuador."¹⁰³ Paradoxically, however, she then said that (1) it would be inappropriate to send the declarations to Ecuador, (2) the LAP Representatives should not be permitted to share the information with their Ecuadorian counsel, (3) both Chevron and "[t]he witnesses would prefer . . . that no one in Ecuador

100

DI 757, at 2.

101

See DI 769, at 10 & n.11.

102

See Tr., Feb. 4, 2013, at 23–24

103

Id. at 41.

have the information,” and (4) “[t]he point . . . is to provide for and address the safety concerns that these witnesses have raised, by keeping their identities out of Ecuador and out of the possession of people who have shown to have a pattern and practice of attacking the witnesses.”¹⁰⁴

If this application concerned purely the private interests of Chevron, there would be little reason not to accept its original formulation of the relief it sought – i.e., to allow disclosure of the information to the LAP Representatives and to Donziger if that proved necessary, subject to their agreement to comply with confidentiality restrictions. But the interests of these witnesses in personal safety and in freedom from reprisals and intimidation, not merely Chevron’s private interests, are at stake here. The Court would have no effective means of remedying any breach by the LAP Representatives of restrictions on their use of the Doe information, assuming it were disclosed to them, even if such a breach could be laid unequivocally at their doorsteps. Donziger’s actions give little comfort that he would comply with confidentiality obligations imposed upon him, at least on those occasions where he is in Ecuador. In the interest of the safety and well being of these witnesses, the Court therefore has granted the relief warranted by the record and that Chevron ultimately seeks despite the confusion and internal inconsistency in Chevron’s initial position. To the extent counsel later believes that disclosure to the two LAP Representatives or Donziger is necessary, they may apply to the Court for appropriate relief.

Upon further consideration from the February 14 order, however, the Court is not persuaded that the Stratus defendants cannot be trusted to comply with the terms of the protective order. Accordingly, on its own motion and by order of even date, the Court modifies the February 14 order to the extent that it applies to the Stratus defendants.

104


Id. at 41–43.

Conclusion

The foregoing sets forth the reasoning and amplifies the findings underlying the Court's February 14 order and constitutes findings of fact and conclusions of law for the purposes of this motion.

SO ORDERED.

Dated: February 21, 2013
Corrected: February 21, 2013, 11:55 a.m.



Lewis A. Kaplan
United States District Judge

(The manuscript signature above is not an image of the signature on the original document in the Court file.)